Ensayos sobre el discurso político Argentino

NICOLÁS LONA KLEINERT

Ensayos sobre el discurso político Argentino

Editorial Autores de Argentina

Lona Kleinert, Nicolás
Ensayo sobre el discurso político Argentino / Nicolás Lona Kleinert. – 1a ed –
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Autores de Argentina, 2020.
120 p. ; 21 x 15 cm.

ISBN 978–987–87–0512–5

1. Ensayo Político. I. Título.
CDD 320.82

Editorial Autores de Argentina
www.autoresdeargentina.com
Mail: info@autoresdeargentina.com

Queda hecho el depósito que establece la LEY 11.723
Impreso en Argentina – *Printed in Argentina*

Dedicatoria

xxxxxxxx

Prólogo

El vacío ideológico de la institucionalidad política no ha sido profundizado ni interpelado a lo largo de nuestra historia. Ante la problemática que nos atañe, ha sido la misma historia la que nos presenta este argumento como tautológico; exigiendo a quienes piensan cómo debería ser la política un arduo proceso de poner este tema en una mesa de debate. Ha sido la realidad misma la eficaz portadora del absurdo dentro de la participación política. No se ha puesto en cuestión jamás, dentro de la dirigencia burócrata, el tipo de participación de un votante en el marco democrático actual, o qué tipo de democracia es la que cada sociedad desea, ya que cada sociedad difiere en anhelos sociales y políticos. El modo y la manera de sostener que una institución política representa un vacío ideológico es posible mediante un análisis histórico.

La historia, no obstante, ha sido la encargada de responder a ciertos interrogantes. Ya que es ella misma la que nos muestra la contradicción estructural en el marco de la institucionalidad política. Y es el sistema democrático, en efecto, la diversificación de dicha contradicción basada en criterios ideológicos. Si entendemos este sistema mediante estas premisas, por consiguiente, la supresión de argumentos o el desacato de estos no serían contraproducentes para el voto, lo cual me lleva a pensar que la afinidad política se genera desde otro lugar que no es, en su defecto, lógico.

No existió un acuerdo para la conceptualización de la cultura. Ha habido, empero, un gran debate en torno a este concepto. Retomo este debate en los primeros capítulos de este trabajo, con la finalidad de demostrar por qué las aspiraciones políticas son inherentes a cualquier sujeto y de qué manera son los sistemas de creencias los que poseen mayor influencia dentro de su capacidad crítica. En efecto, el análisis social mediante la agrupación de distintos sistemas de creencias resultaría el más efectivo. Diversos actores políticos se han obstinado en una categorización étnica o económica, pero me veo obligado a refutar estas distinciones, a la luz de los acontecimientos que mostraron sus falencias.

La creencia colectiva es oscurantista y volátil, tanto como productiva y útil. Si hubiera habido una manera de prescindir de ella, ya se hubiese empleado en incontables ocasiones De hecho, es acertado cuestionar acerca de la existencia de una creencia o un interés colectivos. Más extraña y utópica resulta la idea de que una opinión puede manifestarse a través de un voto en cada período determinado. Sin embargo, la idea de la democracia es identificada como característica inamovible de una sociedad política, por el mero contraste con su antítesis.

La crispación que generan estos razonamientos para el establishment moderno, como la puesta en duda de las instituciones partidarias e ideológicas, plagadas de contradicciones y absurdos, no es más que la clara muestra de que el sistema político debe fomentar su participación de manera racional y directa. Pese a que es una problemática conocida por el conjunto de la sociedad, su puesta en debate es omitida o planteada como consecuente, inevitable.

El proceso inicial de organización política consiste en omitir la mayor cantidad de desigualdades posibles para orientar el sentido hacia un fin en común. En este caso, cuando hablamos de organización política, no estaríamos hablando únicamente de lo partidario, sino también de la religión y las instituciones sociales que se basan en estas premisas.

Por lo tanto, la institución moderna surgiría como una facilitadora de este proceso. No obstante, las instituciones político–partidarias muestran grandes falencias que me propongo analizar

Estamos interpelados de manera constante por el discurso. Y, de igual forma, no podríamos pensar por fuera de él. Voy a referirme al discurso político como lo que posee intenciones e interpelar y convencer, lo que posee en términos estructurales un anhelo de poder. Vamos a partir de la tesis de que todo debate político es un debate retórico. Nuestro trabajo va a centrarse únicamente en gobiernos constitucionales, tomando como ejes principales el discurso y la opinión pública. Antes de iniciar la exposición de la temática, no puedo dejar de evocar el axioma de que todas las medidas corresponden a un contexto social, ya que analizando más de treinta años de gobiernos, los contextos son muy disímiles. Existe una incongruencia entre el discurso político y la acción al llegar al poder.

La cultura y las falencias del discurso

No podemos poner en duda la relación de la política moderna con el interior de las configuraciones culturales[1], ya que los discursos gubernamentales o de campaña lo evidencian. Las configuraciones imponen una apertura y un límite en el discurso, que se relaciona de forma directa con las presiones específicas de un campo político. Dicho campo se genera a través de la convergencia entre una configuración cultural y un discurso masivo. En otra clave analítica, podemos pensar a dicho campo como una trama relacional. Es decir, las posiciones que adoptan los distintos espacios políticos surgen de la relación dialéctica con sus opuestos. Si una fuerza o partido adopta una simbología determinada, la vertiente que quiera escindirse va a definirse automáticamente como su antítesis, o en su defecto, como una fuerza alternativa. Al margen de la intencionalidad de las distintas fuerzas políticas, en el instante en que una de ellas tome un discurso y una simbología específicos, va a obligar a definirse a las otras, y debido a la constante relación dialéctica, cada cambio va a incidir inevitablemente en los demás discursos. Es una interacción de semejanza y oposición, entre fuerzas opuestas y cercanas. Un espacio político determinado, en la clave analítica que venimos desa-

1 Campos de posibilidad; lógica de interrelación entre las partes; trama simbólica común, lenguajes verbales, sonoros y visuales en los cuales quienes disputan pueden a la vez entenderse y enfrentarse; aspectos culturales "compartidos", califica Grimson como los factores constitutivos de la configuración cultural.

rrollando, tiene que definirse como la antítesis de su antagónico, y al mismo tiempo, diferenciarse de sus semejantes de un modo leve. Los semejantes o sectores más cercanos no solo se definirían como disímiles, sino que a su vez tomarían algunos matices de los espacios afines. Esto surge ineludiblemente, ya que la intención de un discurso político es expandir su campo de influencia.

La *cultura* puede ser considerada, desde un punto de vista epistemológico, lo contrario a *natura.* Este dualismo, empero, es falso. El concepto de cultura proviene del latín *cultus*, y se define como la cultivación de las facultades intelectuales y espirituales del hombre. Vamos a entender la *cultura* como planteó Tylor, en ese todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto miembro de una sociedad (*Cultura primitiva*; 1871). Ya que hoy, dentro de la acción del sujeto, es imposible la *no cultura*, hablar del ámbito cultural dentro de un campo político suscita una problemática. En el momento en que surge como herramienta el lenguaje, y la cosa–en–sí no puede ser representada de otra forma que no sea por él, hablamos de cultura.

La cultura es, y siempre ha sido, una disputa discursiva. En el aspecto político discursivo, este conlleva, como dijimos anteriormente, una expansión y una limitación en forma simultánea. El discurso político genera un orden social determinado, contingente, y que excede lo partidario. Por consiguiente, no se remite únicamente a una institución, o a un conjunto de instituciones políticas determinadas. Debe ser simple y directo. Mientras más simpleza contenga, más posibilidades de expandirse posee. Debe guardar más carga emocional que lógica y debe prescindir de percibir a la sociedad como algo homogéneo. El discurso político no es capaz de aprehender a todos los estratos sociales y políticos, no obstante logra un consenso. Sus construcciones siempre se basan en incidir en lo público. No tiene vital importancia la proceden-

cia institucional de un discurso político, sino que lo fundamental es el análisis de su contenido retórico.

Es epistemológicamente acertado plantear que el discurso no solo construye con su enunciación, sino que también lo hace mediante su omisión. A partir de este razonamiento, se ratifica que lo discursivo excede el ámbito lingüístico. Dicha omisión, entonces, sirve para ampliar la influencia en el espectro social y, a su vez, ratificar la identidad cultural sobre el espacio ya abarcado. Debido a que, como afirmamos anteriormente, aprehender todos los estratos sociales no es posible, el discurso político partidario se ve obligado a omitir ciertas direccionalidades.

En la relación entre significante y significado, el discurso político traza su principal eje en la disputa por el significado, que es polisémico y vacío, libre de interpretación. Un eslogan político posee significados de forma amplia y ambigua. La imagen producida por el significante es la que moldea el discurso y cada receptor le añade su arbitrariedad mediante una concepción individual. De todos modos, los significados entran en disputa en el marco de la relación dialéctica discursiva y desde allí se origina una lucha de sentidos entre las distintas fuerzas políticas por un significado en concreto. Podemos entender la confrontación política moderna desde ese razonamiento. Los conceptos abstractos son significados que inhiben el debate político generando en la conciencia del sujeto múltiples interpretaciones acerca de dicho concepto. A su vez, los significados son la génesis de la retórica de los discursos partidarios. En efecto, debatir en representación de ideas partidarias con la finalidad de un acuerdo político resultaría forzado o complejo, y rara vez se encontraría una convergencia.

La dimensión social de sentido producida por un discurso es lo que demuestra su poder, ya que este proceso excede el parámetro lingüístico. Por ende, si se requiere hacer un análisis discursivo, se deberá comprender como primordial dicho efecto producido. Todo discurso forma

parte de un gran fenómeno interdiscursivo. El modelo saussureano no podría explicar, a través de la semiología, cómo funcionan las marcas discursivas dentro de un entramado social. En efecto, como superación del estructuralismo lingüístico, *la teoría de los discursos sociales*[2] plantea una doble hipótesis con el objetivo de remarcar las condiciones productivas de los procesos significantes y dar cuenta de sus dimensiones constitutivas. Toda producción de sentido tiene una manifestación material.

La teoría de los discursos sociales amplía el espectro lingüístico hacia la semiosis social, que es una red significante infinita. Dicho sistema discursivo, planteado por Eliseo Verón, contiene dentro de su esquema dos pilares opuestos y fundamentales, las condiciones de producción y de reconocimiento, que plantean la inmanencia dentro del análisis como un proceso inalcanzable. Es decir, el discurso no puede ser analizado en sí mismo, sino por sus marcas y huellas, que dan cuenta de sus efectos. Desde este punto de vista, no existe un análisis interno ni externo. La dimensión social de sentido producida por un discurso es capaz de generar un consenso, siempre que se condiga con las creencias e ideas de un contexto determinado.

No obstante, un análisis crítico de la teoría de Verón nos llevaría a analizar los factores externos que condicionan y moldean el discurso. Todo discurso está insertado en lo social, y en una red interdiscursiva. Por este motivo, el efecto producido está condicionado por los discursos que el sujeto trae interiorizados. Cuando se pronuncia un discurso, lo que se está haciendo es una mera operación de contraste con los discursos incorporados previamente por el sujeto, y los espacios de convergencia son los que van a incidir en las afinidades de dicho individuo.

---

2 Teoría desarrollada por el semiólogo, antropólogo y sociólogo Eliseo Verón, que identifica las producciones de sentido como fenómenos sociales. Todo proceso significante debe ser explicado a través de sus condiciones productivas.

Si se desarrollan las cualidades de un discurso político emitido, por lógica, también se debería hacer un análisis de su recepción. El sujeto receptor del discurso podría poner este en duda mediante una reflexión crítica. De todos modos, dicha reflexión puede verse sesgada por una serie de factores externos. Vamos a abocarnos a uno de los tantos factores que pueden sesgar un razonamiento crítico, el gran fenómeno de masas surgido entre los siglos XIX y XX. Podemos sostener, en concordancia con Freud, que un individuo integrado en una masa siente una capacidad de obrar que no había sentido en su aislamiento. Las tendencias inconscientes del yo se exteriorizan y todo sentimiento y acto son contagiosos. Dentro de este intercambio, el sujeto ya no posee conciencia de sus actos y se desliga de su responsabilidad. En este caso, el discurso homogeniza un sector social determinado y lo agrupa mediante la imposición de una serie de intereses, y los somete a una voluntad y moral colectiva.

Si el discurso pronunciado no es simple, no contiene la misma capacidad de movilización. La impronta lógica de dicho discurso debe ser escasa, ya que la caracterización de la masa es la emotividad con la esta se moviliza. El parámetro es emocional, por lo tanto, el discurso debe adaptarse a él. Hablamos entonces de una "inhibición colectiva" de la reflexión y de una subversión de la ética individual.

La emoción, para ser comunicada de manera eficaz, debe ser exacerbada en el discurso. El mayor intercambio no existe entre los propios sujetos de la multitud, sino que estos sujetos buscan inexorablemente a un líder. La multitud debe mantenerse en cohesión por algún poder, de otra forma, no sería posible su existencia a lo largo del tiempo. Al líder omnipotente se le atribuye un grado de inteligencia que la masa cree incapaz de alcanzar. El lazo libidinoso que existe entre los sujetos y el líder erradica la no puesta en duda del propio líder y la inhibición de la capacidad reflexiva de sus seguidores para con él. La transferencia que existe entre el líder y cada sujeto que compone la multitud es ambigua.

Dentro de la alteración de la conciencia moral de los sujetos, los nuevos valores desarrollados por la multitud indefectiblemente desarrollan castigos rigurosos para los individuos que no adhieren a esta misma ética. Por ende, la masa se autoatribuye el bien y actúa en nombre de él. De todas maneras, el bien no es deseado para los disidentes. Freud, en su artículo "Psicología de las masas y análisis del yo", realiza un análisis de las masas religiosas que me parece pertinente evocar:

"Toda religión, aunque se denomine religión de amor, ha de ser dura y sin amor, para con todos aquellos que no pertenezcan a ella. En el fondo, toda religión es una religión de amor para sus fieles y, en cambio, cruel e intolerante para con todos aquellos que no pertenezcan a ellas" (Sigmund Freud; 2581)

La sociedad de masas, como el nacionalismo, puede darse con propósitos muy diversos y abarcar diversas ideas políticas. El análisis sociológico de las masas puede ser incorporado por el weberismo, la escuela de Frankfurt y corrientes neoliberales y aun así, pese a la diversidad de ideas, encontrar una convergencia. La industrialización, la alfabetización, el surgimiento de la prensa masiva, el aumento de la densidad demográfica y el desarrollo de los centros urbanos generan inexorablemente una nueva cultura de masas. Sin embargo, estas protestas de masas no presentan una relación cercana entre los individuos que los componen, sino que existen relaciones frías y abstractas. Los vínculos sociales y éticos individuales se transmutan en los colectivos, y estos son afectados por una realidad social determinada. De todos modos, un movimiento de masas no constituye en sí una protesta social cotidiana. Podríamos aquí hacer una distinción. Para que exista un movimiento de masas se necesita un discurso particular que lo interpele y guíe, y en efecto, el movimiento se desarticula sin dicho discurso.

Si situamos a la política en el terreno de lo verosímil y de la creencia, entendiendo el conflicto que estos dos mismos conceptos generan, sería imposible entonces validar una idea política por sobre otra. No

habría manera de dirimir si una creencia resulta más eficaz que otra, lo cual no necesariamente significa que una idea no pueda ser impuesta por encima de otras. Se encuentra asimismo la posibilidad de construir un discurso pseudorracional y verosímil, capaz de relativizar la moral y el sentido de un escenario en concreto. Lo verosímil no siempre es verdadero, o más bien, no necesita serlo.

La producción de sentido de la política moderna se desarrolla paralelamente a una simbolización determinada. Es decir, el discurso debe estar acompañado de una praxis y un símbolo característicos. Remitiéndonos nuevamente al análisis de las masas, las manifestaciones deben poseer una semiología representativa que contribuya a su perspectiva homogeneizadora. Identifico, en efecto, los signos como características intrínsecas a la confrontación discursiva. Esta representación simbólica de sentido agudiza la autopercepción de un espacio político y, a su vez, acentúa su hostilidad ante los otros espacios. El campo político, al adoptar un símbolo, se autopercibe como válido, e inevitablemente confronta con espacios opuestos.

Pudimos ver en los discursos de los regímenes totalitarios del siglo XX, como el fascismo y el nacionalsocialismo, a la *emoción* apartando el uso de la razón crítica. Entendemos como *razón* a lo que el hombre identifica, a partir de la época moderna, como fuente de verdad. Los procesos totalitarios del siglo pasado fueron grandes fenómenos de masas. Haremos, utilizando algunas ideas de la escuela de Frankfurt, una distinción entre razón instrumental y razón crítica. Desde un parámetro moderno, la racionalidad instrumental es la eficiencia en los medios. Logra calcular probabilidades y adecuar recursos a un fin concreto. Estos tipos de razonamientos no juzgan la ética de los medios empleados. No obstante, la razón crítica no debería disociarse de la razón instrumental, sino que debería aprehenderla y considerarla como limitada. Una postura crítica dentro de un campo político jamás podría centrarse en la defensa de dicho campo sin reparo alguno, sino

que debería tomar una postura ecléctica entre los distintos campos políticos y concebir las ideas de mayor semejanza. El absurdo reside en el apoyo incondicional a un partido sin contemplar sus posibles cambios en concordancia con los diversos contextos políticos a lo largo de la historia.

Si bien los sucesos ocurridos durante el siglo XX tienen incidencia en las ideologías actuales, no se podría, de ninguna manera, tomar dichos sucesos como primordiales en la consolidación de la política actual, y de igual forma, no se podría escindir el sistema político vigente del contexto de posmodernidad. Van Dijk, con una gran influencia de la *teoría crítica*, desarrolló un *análisis crítico del discurso* que se posiciona como herramienta para discernir los abusos de poder y las desigualdades sociales. Van Dijk plantea al discurso como una herramienta de poder para grupos e instituciones. Los que gozan de mayor control sobre discursos son los que, por consiguiente, tienen más poder. En paralelo, si hay un dominante, hay un dominado, y el dominio se da a través del discurso. En este sentido, el autor extiende la concepción de la teoría de los discursos sociales y la somete a un análisis crítico.

A partir del análisis mencionado en el párrafo anterior, emerge una nueva perspectiva, ya que, en concordancia con lo que habíamos analizado, podemos sostener que todo discurso político esconde una relación de poder. Por consiguiente, en nuestro contexto actual, la política está mayormente basada en la razón instrumental. Todo orden se remite a una relación de poder implícita, lo cual tampoco debería llevarnos a pensar el poder como un factor peyorativo. El discurso político se basa en el arte retórico de generar o tomar el poder.

El discurso posee mayor capacidad de interpelar cuando apela a emociones exacerbadas. La libertad es la idea principal de la modernidad y en nombre de ella se institucionaliza y se ordena. Dicha idea se relaciona con la conducta autónoma del sujeto. Sin embargo, esta idea no deja de ser polisémica y de múltiples interpretaciones para las

distintas esferas sociales. La institucionalización se genera, a partir de la época moderna, para alejar la irracionalidad de la cultura e imponer una jerarquización que perdure a lo largo del tiempo. Podríamos atribuirle un comportamiento emocional a una figura política, pero no al aparato estatal, o a una institución en conjunto. Por otro lado, en la época posmoderna, los cambios se tornaron viables mediante la institucionalidad. De hecho, la democracia representa por sí misma una idea de cambio constante, que puede ser llevado a cabo por la vía institucional.

Los impulsos y las emociones son utilizados por la clase dirigente para expandir su influencia política. Hemos visto que los regímenes totalitarios han apelado a la conducta natural del individuo, mostrándose hostiles hacia una idea de civilización. Como plantea Maquiavelo, *el príncipe debe saber hacer buen uso de las leyes y de la fuerza, es decir, ser mitad hombre y mitad bestia*. La idea de rebelión no es en sí misma una rebelión, sino que, en la contemporaneidad, solo se queda en la superficialidad vanguardista de un conflicto con un trasfondo emocional. En consecuencia, el sentimiento o idea de liberación se encuentra ferviente y es aumentado por el movimiento de masas. Estas ideas no podrían nunca oponerse a la creencia impuesta a partir del discurso, podrían ser verosímiles, y por lo tanto, válidas.

El siglo XX deslumbró la apoteosis de lo discursivo y la movilización de grandes masas por ideales. La identidad nacional se construye, por consiguiente, desde la autoconsciencia de la misma nación. Si bien existe una injerencia del Estado, son los individuos los que se subordinan y encuentran en él un aparato con capacidad de representación social abarcadora. Incluso, dentro del nacionalsocialismo, sería imposible entender dicho movimiento político sin la influencia del pangermanismo, o de los valores del Imperio alemán de fines del siglo XIX.

La razón crítica debe aprehender la intersubjetividad como primordial y emanciparse de toda emotividad. No obstante, le es imposible

emanciparse de toda creencia. Esto resulta algo utópico. La simplificación discursiva es la clave metódica del discurso político. La razón crítica, a su vez, debe contemplar los medios empleados para los fines, sin soslayar las consecuencias que puedan desencadenar su uso emotivo o irracional. La corrección de la conciencia de un individuo en pos de generar un pensamiento crítico no se puede llevar a cabo de forma colectiva, con una simbología homogeneizadora y un discurso totalizador.

Si hablamos de una inhibición de la reflexión crítica, no puedo no evocar el concepto de *industrias culturales* desarrollado por Horkheimer y Adorno. Hablar de una industria de la cultura resultaría epistemológicamente contradictorio. De hecho, la cultura que se integra al sistema de producción es la que sobrevive, y una vez integrada, forma parte del sistema capitalista del cual no puede disociarse. El concepto evidencia la lógica de mercado liberal en la cultura. En analogía con el pensamiento moderno, la posibilidad de un desarrollo subalterno a la industria deja de ser desarrollo en sí mismo, y se identifica como insuficiente. Este mismo proceso ocurrió con las instituciones políticas. Los medios masivos de comunicación y los partidos políticos se relacionan de manera directa. Ser reconocido por la prensa masiva genera prestigio y éxito para un candidato. Otorgan la idea taxativa de que el producto o sujeto requiere la atención del público.

No se puede identificar la cultura como algo unívoco. Es, sin lugar a dudas, una confrontación discursiva constante. Si hay disputa cultural, hay por consiguiente una disputa política. Creer que la cultura posee un fundamento cosmológico que se manifiesta mediante la ley y el orden de manera natural anula la posibilidad de una disputa y omite las relaciones de poder que se dan dentro de las configuraciones culturales. La idea de la cultura como la lucha por la producción social de significados, emancipada de cualquier naturaleza, se acerca a un enfoque crítico. Esta última noción ha demostrado ser la primordial en los úl-

timos años, con proyectos de ley y discursos que han generado debates dentro del entramado social. La principal problemática subyace en la relación del sujeto con su estructura. Dicha estructura es la normativa, y es ella misma la que produce las contradicciones que sesgan un razonamiento crítico. La problemática del sujeto con su estructura no se debe a la mera participación del individuo en la esfera pública o en los asuntos sociopolíticos. De hecho, no podría percibirse nunca a un individuo aislado de la sociedad. La principal dificultad hace foco en la atomización del sujeto ante los aparatos culturales masivos y los movimientos de masas.

Por otro lado, la crítica inmanente de un sistema cultural por un actor situado en un territorio ajeno a ella es desestimada. No hay objetividad posible. Podemos, entonces, situar a una configuración cultural dentro de un sistema de creencias. En efecto, la mutabilidad de un campo político que se encuentra arraigado a una configuración cultural determinada es escasa, y el apoyo a ese campo es culturalmente fuerte y pronunciado. La relación dialéctica que se produce entre los distintos sectores políticos toma lugar dentro de las configuraciones y la complejidad del debate asciende. La tónica que encuentro dentro de la habilidad receptiva del sujeto es la creencia. De esta forma, toda proyección política termina siendo una.

Toda cultura y todo discurso, por más diversos que sean, generan un orden. El orden social es el eje mediante el cual se articula el pensamiento filosófico político. El discurso político no es el único que incide en lo público, ya que el campo discursivo no es holísticamente retórico. El Estado, al ser la organización política de una sociedad, tal como lo afirmaba Weber, es el principal garante de su orden. Entendemos la disputa por el orden social en cuanto a lo discursivo, pero lo que sería productivo preguntarse aquí es por la génesis de este orden. Desde un punto de vista psicoanalítico, la prohibición, lejos de elidir el deseo, lo formula. Es decir que el sujeto es deseante en tanto se le impone la

prohibición. A partir de la prohibición del incesto, tal como lo planteaba Freud, el deseo individual se sostiene en la exogamia. La prohibición, como concepto ontológico, genera un orden social determinado. Desde este punto de vista, se genera la primera confrontación entre natura vs. cultura. El individuo, a partir de la prohibición, se ordena y se inserta en un campo social. ¿Podríamos afirmar, entonces, que a partir del rechazo al incesto se da la primera etapa de culturización? Para seguir desarrollando sobre esta incógnita, el artículo freudiano de *Tótem y tabú* realiza un análisis antropológico de aborígenes australianos, los cuales no parecían tener similitud alguna con sus tribus vecinas. No obstante, estos aborígenes, que eran considerados salvajes, y se presumía que no poseían ningún tipo de jerarquía social o sexual, contaban con un riguroso castigo en contra del incesto. Dichas tribus se dividían en grupos pequeños denominados tótems y los habitantes de cada grupo no debían casarse ni establecer relaciones sexuales entre sí. A partir del profundo arraigo de la ley de exogamia con el sistema totémico, podemos decir que, en una tribu sin ninguna similitud lingüística ni social con sus vecinos, ni con la civilización actual, también existieron un orden y una cultura que rigieron allí. Con respecto a la pregunta planteada anteriormente, esta podría ser refutada si nos centramos en las civilizaciones antiguas, ya que la prohibición del incesto fue impulsada por el catolicismo. Sin embargo, el argumento que plantea la prohibición como generadora de un orden sigue vigente, ya que hablamos de un desplazamiento del tabú hacia otro círculo social. Por ende, la prohibición como concepto ontológico se mantuvo inherente, a lo largo de la historia, a un orden social determinado.

Freud plantea dos significaciones opuestas para el tabú. Puede significar lo prohibido o impuro, o por otra parte, lo sagrado. No se podría sostener de forma taxativa al tabú como la principal génesis de la legislación moderna. Pero, de todas maneras, sí se podría trazar una analogía con las primeras legislaciones anteriores a la modernidad.

Tampoco entonces se podría entender el tabú como algo estático. De todas maneras, si hay tabú, hay por consiguiente, un orden social. Si he de centrarme en el ámbito de las relaciones de poder dentro de un orden, podríamos formular que este está ontológicamente construido en un imaginario contingente. La sociedad civil se rige dentro de las ideas de lo que Gramsci podría denominar los *intelectuales orgánicos.* Estos intelectuales podrían materializar su imaginario, sin embargo, no podrían convencer a la sociedad en su conjunto sobre sus ideas. En el caso del Imperio romano, una secta reducida pudo imponer el cristianismo por encima de la multiplicidad de religiones y creencias que existían dentro de Roma. Dichas religiones disidentes buscaban un lugar dentro del Imperio. De todos modos, un grupo reducido constituyó la religión hegemónica.

Volviendo a la construcción del imaginario, este se desarrolla a través de la conciencia y no resulta posible escindir a la cultura del imaginario, ya que este existe porque hay una actividad cultural. Dicha actividad se efectúa mediante el lenguaje. Si existe un imaginario es porque el lenguaje construye. Y en efecto, si hay lenguaje, hay cultura. La formulación conceptual dentro de la misma conciencia también se da a partir del lenguaje. Por lo tanto, el individuo está integrado en la medida en que puede hacer uso de él. A partir de esto, encuentro una analogía entre la noción de creencia e imaginario, ya que la creencia tampoco puede disociarse de la cultura y es la misma que reproduce un orden social contingente.

Sería prudente trazar, dentro de la política, un vínculo entre los conceptos razón y creencia, puesto que dentro de la creencia hay razón. Si bien la interacción política se origina a partir de la creencia, esto no implica que ella sea ineludiblemente ambigua. Es el resultado, en términos de Bourdieu, del *habitus*[3]. La estructura del sujeto al pasar por

3 No es únicamente un concepto de Bourdieu, sino que se remonta a Aristóteles. Hace referencia a las formas de acción y de pensamiento de un sujeto dentro de un campo.

el proceso de socialización obliga a dicho sujeto a adquirir una creencia y, en efecto, racionalidad. Dicho esto, la racionalidad no se encuentra por encima de la cultura y la creencia. Estos dos últimos conceptos moldean y dirigen la razón. De otra forma, no podrían entenderse las confrontaciones políticas y religiosas, y la devoción hacia una corriente política que se identifique como la única verdadera. Dichas confrontaciones se basan en un discurso, que es incorporado por el sujeto en las primeras fases de socialización.

Se ha planteado desde la interacción política, al margen de la raza, clase y género, un ordenamiento en el entramado social basado en configuraciones culturales. Si hemos de preguntarnos por qué un discurso interpela a un sector en particular y no a otro, las cuestiones de clase ya no forman un parámetro válido. La distinción dicotómica entre burguesía y proletariado no es visible en este siglo o, en su defecto, es compleja de discernir. Entonces, una tendencia progresista o conservadora no necesariamente se encuentra basada en un parámetro económico o de clase. La pregunta que es necesario plantearse es: ¿por qué un ideal moviliza a un sector y no a otro? Partimos de la premisa básica de que el hombre se moviliza mediante un sistema de creencias y una cultura, se trate o no de un asunto meramente partidario. Por ende, dichas creencias son inherentes a un sector cultural que se moviliza conforme a ellas.

De la misma manera, no se podría dejar de lado el componente psicoanalítico que condiciona la acción del hombre. No nos detendremos estrictamente en la consolidación del orden social si no es para esclarecer la noción de que el discurso político es el principal generador de un orden determinado y contingente. La prohibición y el deseo formarían dos pilares claves para la acción colectiva y el orden. De esta forma, entendemos que existe una predisposición del sujeto a un orden, que se conforma a través del discurso.

Si partimos de la tesis que entiende a los partidos políticos como herramientas institucionales para la toma del poder en la política mo-

derna, la ideología no sería un elemento indispensable para la integración de dicho partido. Lo que también demostró la institucionalidad política, por otro lado, es que había una distinción taxativa entre el discurso de campaña y el discurso gubernamental. El discurso de campaña parecía acoplarse a una realidad abstracta, poco verosímil e intangible. El discurso gubernamental, una vez alcanzado el poder, se disociaba llamativamente de las promesas de campaña. Podemos decir, entonces, que la política es el arte retórico de la toma del poder.

El absurdo de la política moderna es el anhelo de la toma del poder por el mero hecho de llegar a él. En muchos casos encontramos contradicciones en los discursos partidarios, cuando se criticaban medidas anteriormente elogiadas, o se hacía lo opuesto a lo previsto. Puedo decir que la política moderna se basó en un hecho no moderno. Es decir, la acción política funcionó como un baluarte en los reclamos en contra de la desigualdad y en la lucha por un salario digno. Dicho esto, las pujas económicas y las luchas salariales no eran algo moderno. Incluso, desde la Edad Media, existieron luchas por un reconocimiento laboral y una mejora en el salario o, en otras ocasiones, una mejora en el intercambio material.

Como había sostenido antes, la afinidad política no se trata taxativamente de una cuestión de clase. Sin embargo, se podría argumentar con acierto que la raza, la clase y el género son categorizaciones que forman un contraste discursivo con el orden social de manera hegemónica o subalterna. Pero, de todas formas, estas tres categorías culturales no poseen en sí un enfoque unívoco. Uno de los desaciertos del pensamiento marxista fue pensar que la clase proletaria iba a generar una revolución en toda Europa. Los intereses del proletariado eran diversos y la movilización de una clase determinada por su mera condición de clase, a lo largo de todo el siglo XX, no resultó posible.

Podemos desarrollar las entidades del imaginario político, las estructuras lingüísticas y lógicas, y sin embargo, un verdadero análisis

no debería escindirse del contexto posmoderno. ¿Se podría articular el individualismo de Lipovetsky con el contrato social de Rousseau? ¿Cómo sería pensar el discurso político en un contexto de posmodernidad o modernidad líquida?

El análisis estructural de Verón es destacable en cuanto al discurso partidario. Acordamos que, si hablamos de receptor, no es lo mismo que hablar de destinatario, y que todo discurso busca crear una identidad colectiva y generar poder. Y si hay un destinatario positivo, hay por consiguiente uno negativo. Lo que Verón denomina "destinatario" y "contradestinatario". El contradestinatario sería nombrado como el contrincante, el antipueblo o antipatria. Es el sector social que, en caso de ser aceptado, debería cambiar su percepción social y adaptarla a los principios del discurso dominante. En épocas de individualismo, si bien el discurso partidario va a mantener sus estructuras, va a tener cada vez más dificultades en tener injerencia sobre las sociedades.

Las ideas de Rousseau, junto con las de Montesquieu y Voltaire, fueron los principales soportes del liberalismo y la Ilustración. ¿La idea de voluntad general se contrapone al individualismo? A lo que José Pablo Feinmann categorizó como la *era del imposibilismo*, o el fin de los grandes relatos. Discrepo de Lipovetsky en cuanto a la "indiferencia de las masas" que él plantea, ya que los partidos de masas y las movilizaciones no han desaparecido aún. No obstante, los discursos partidarios han cambiado. Los movimientos de protesta acentúan el proceso de personalización[4]. A la política la reemplazó la gestión, un concepto proveniente del marketing. Lo necesario es la información, el dato útil. Podemos sostener, sin intención de una valoración ética, que el proceso de realización personal se volvió sustancial, y más preponderante que la realización colectiva.

4 Véase La era del vacío, Lipovetsky, p. 32 (1983).

Hay entonces un distanciamiento de la burocracia política para con los civiles. Dentro de la cultura posmoderna, los políticos pierden legitimidad por su mero rol, ya que el único discurso capaz de interpelar es el de la realización personal. ¿Es esa la finalidad de la política? La teoría de la *voluntad general* como uno de los principios básicos del liberalismo, no puede aplicarse, o al menos no de manera correcta, ya que el individualismo fragmenta la sociedad actual. En efecto, la política no es un cambio radical, ni transformación, sino pragmatismo. El gestor más eficaz es el que tiene el poder, y no el que sobresale por sus ideas. Si la sociedad se expresa, debe hacerlo como tal, y un interés privado, sea cual fuere, se opone a esa expresión y a esa voluntad. Si el espacio público mengua y el interés privado se expande, la posibilidad de consenso se hace paulatinamente más inaccesible. Como plantea Rousseau, *la soberanía no es otra cosa que el ejercicio de la voluntad general*. Si llevamos esta idea, constitutiva del Estado nación moderno, a la actualidad, vemos que la gobernabilidad se torna un proceso más complejo. El Estado se achica, ya que es percibido como algo inútil.

Es posible esquematizar un análisis del discurso, pero no así un análisis de su dimensión de sentido. Podemos sostener que la lucha política siempre fue una lucha discursiva. La idea del individualismo posmoderno se muestra hostil hacia cualquier discurso partidario. La institucionalidad política no se encuentra capaz de generar un consenso social en épocas de individualismo, y el discurso se vuelve una herramienta para la toma del poder.

En Occidente, el debate político se presentó como un mero debate retórico, y por ende, como la capacidad de convencer a otro. Entonces, por consiguiente, podemos decir que el discurso político se basa en construir poder, que no es más que convencer al otro de realizar alguna acción determinada. Como cita Maquiavelo en el caso de Alejandro VI, que no buscó otra cosa que engañar a los hombres y siempre encontró la manera de hacerlo. Si hay un hombre con intenciones de

engañar, siempre habrá otro con intenciones de ser engañado. La cultura y la creencia son los factores que definen la afinidad política. Las *industrias culturales* componen un cerco para el discurso político, que genera una reproducción discursiva constante y acrítica.

Los partidos con ideologías extremas, sean de derecha o de izquierda, en pocas ocasiones pudieron llegar al poder mediante elecciones abiertas y democráticas. Esto se debe a su incongruencia con la realidad política y cultural. El discurso político es un conjunto de enunciados retóricos que buscan una condescendencia con una cultura y un grupo de creencias determinado con la finalidad de generar poder, soslayando las propias contradicciones internas, o la coherencia entre el discurso y la acción en el poder. Esto es, sin embargo, inherente al sistema democrático moderno.

1. El discurso radical y peronista en la construcción del ser nacional

El término *política* ha adquirido distintos significados a lo largo de la historia. Aclaro que en el siguiente escrito voy a prescindir de ellos, ya que la palabra tiende a confundir más que aclarar, y ante tal situación, no es pertinente sino remitirnos a su simple etimología. La palabra *política* viene del griego *polis*, y fueron ellas las primeras ciudades que podrían considerarse civilizadas en términos occidentales. No obstante, no importa sino recalcar la importancia del discurso político en la consolidación de dichas civilizaciones. Dada la polisemia de la palabra *política*, la tónica de este ensayo va a consistir en demostrar la importancia del *discurso* político en la consolidación de nuestro ser nacional.

Establecer una relación directa entre sofisma y democracia sería acertado desde el entendimiento de la génesis de la armonía social. Es decir, eliminar el acceso al poder por herencia ayudó a construir un

sistema de ideas que permitió amplificar los márgenes de libertad del hombre. No entendemos, no obstante, a la sofística como un conjunto de argumentos falsos que constantemente pretenden ser verdaderos de manera capciosa. El sofisma se relaciona con el discurso, y el discurso se relaciona con la retórica, y en efecto, todo discurso político es un discurso retórico. Platón odiaba a fondo la retórica y la relacionaba con la sofística. Y fue Aristóteles el que caracterizó la retórica como *todo lo posible verosímil y convincente*. Empero, entendemos al *todo* como lo que puede ser expresado a través del discurso, ornamentado y retóricamente, lejos de una finalidad educativa y dialéctica, sino cercana a provocar una opinión y un convencimiento. Esto no significa, por ende, que el discurso sea falaz. Nietzsche plantea a la retórica como *un desenvolvimiento de los medios artísticos dados en el idioma*, y supera la tesis aristotélica, pues la retórica es la misma esencia del idioma.

De todas formas, caeríamos en un grave error si definiéramos la sofística en abstracto. El nacimiento de la polis trajo un modelo de civilización a la época antigua en el siglo V a. C. Este surgimiento significó un gran avance intelectual para los griegos y un gran entramado social, político, religioso y artístico[5]. En consecuencia, la sofística ayudó a la consolidación de un nuevo debate público, y generó a la política como un espacio de disputa y discusiones.

El discurso político, como mera herramienta retórica, funcionó para expandir la disputa política dentro de la polis, y en consecuencia, dicho discurso fue útil como generador de un orden social. Al mismo tiempo, es el discurso político el que genera poder, y este es un poder legitimado, normalizado, que consiste en que su coerción sea percibida como lógica. El sofisma contribuyó a que el poder sea discutido públicamente, ya que este se basaba en la razón, y significó el baluarte para la política moderna.

5 Alejandro Finocchiaro, El camino de la democracia en Grecia: los sofistas. Introducción, p. 9.

El discurso construye un imaginario. Desde la Época Clásica, el imaginario fue variando conforme a los distintos tipos de jerarquías sociales. El funcionario público se consideró, a lo largo de la historia, como el más capacitado para otorgar un bienestar. Con el avance de la religión y la mitología, la explicación de los fenómenos sociales giraba en torno a las creencias sobrenaturales. Lo que en términos hegelianos entenderíamos como religión, lo infinito ante sí[6], era representada en forma artística para los griegos, para luego convertirse en el fundamento de las acciones políticas de los reyes, categorizándose como divinidad. Dentro del imaginario construido a través del discurso, se afianzaba un tipo de sociedad que era considerada normativa, natural y consecuente.

A partir de las ideas ilustradas del siglo XVIII, se consolidó un nuevo imaginario, un Estado liberal, que incluía los principios de la voluntad general y la participación popular en la esfera democrática. Se declararon los derechos naturales del hombre y lo que hoy se conoce como Estado moderno. Por ende, podemos hablar de una puja entre la religión y el discurso político durante siglos, que intentaban incidir en el orden social. En este siglo, las propias civilizaciones empezaron a preguntarse por la identidad.

Lo que se consolidó a partir de la Ilustración fue a la nación entendida desde su sistema legal, impositivo y estatal. No obstante, los fundamentos filosóficos eran la mera contraposición al pensamiento político medieval, ya que el bien común, la igualdad y la fraternidad eran los pilares fundamentales. Rousseau sostenía que solo la voluntad general podía dirigir las fuerzas del Estado[7]. Las distintas revoluciones liberales dieron paso a la consolidación institucional de partidos políticos. Sostengo que dicha aparición no fue más que la institucionalización de los discursos políticos en puja. Es decir, la disputa por construir, en términos ilustrados, un ser nacional.

6 Hegel, p 159, Introducción a la historia de la filosofía (1832).

7 Jean–Jacques Rousseau, El contrato social, p. 27, 1762.

Pero ¿qué es un ser nacional? O, primordialmente, ¿qué es una nación? Y, en efecto, ¿habría conexión entre nación y discurso? Podemos, en principio, sostener que la nación se construye, que es un fenómeno interdiscursivo. Sin embargo, lo pertinente sería preguntarse por la comunidad, ya que la nación pensada en términos ilustrados es inherente a este concepto.

Platón, en *La república*, planteaba, mediante los diálogos de Sócrates, a los filósofos como gobernantes de la polis y ponía en discusión el tema de la justicia dentro de ella. No podríamos, en consecuencia, decir que el imaginario nacional fue constituido enteramente a partir de la Ilustración. Lo que se consolidó a partir de dicha corriente intelectual fue el concepto de democracia popular y el fin del absolutismo monárquico. La palabra *república* hace foco, en su etimología, al espacio público. Lo que Platón abordaba era el debate sobre cómo administrar lo público.

Dentro de la nación moderna, la teoría de separación de poderes es una abstracción pura. Los poderes del Estado no pueden, estructuralmente, escindirse unos de otros. Si Montesquieu planteó dicha separación, lo hizo, por consiguiente, frente a un gran y aceptado absolutismo monárquico. Y fue la contraposición a dicho absolutismo lo que llevó a soslayar la imposibilidad teórico–práctica de que un aparato estatal gobernase un territorio dado mediante tres esferas completamente aisladas. La nueva disposición gubernamental ilustrada aplicó la sanción de leyes por el bien común. Al mismo tiempo, el Estado era el garante de la libertad de los civiles.

La nación es un conjunto de relatos y discursos organizados para idealizar un sentimiento de igualdad y una búsqueda de un bien común. Por ende, la identidad nacional está basada en un conjunto de creencias, que a su vez intentan generar un sentimiento de homogeneidad cultural. Como sostiene Ernest Renan, hay en el hombre

algo superior a la lengua: la voluntad[8]. La raza, la religión y, como se ha mencionado, la lengua, no son factores que disuelvan una nación; la ciudadanía procrea una sentimiento de igualdad. Hay un deber cívico, que debe ser cumplido y efectuado, y al mismo tiempo, existe un deber y un sentimiento nacionales. El sentimiento de patriotismo es, al mismo tiempo, un sentimiento de igualdad. De todos modos, lo que supera a la voluntad es la esencia del sujeto. El hombre es esencialmente razón[9]. Y fue la misma razón práctica la que llevó al hombre a cuestionar las malas condiciones de vida generadas por las monarquías. Por ende, la pregunta por la identidad nacional nace de la propia razón.

Si bien entendemos a la nación como un conjunto de relatos, esto no significa que no haya un conjunto de tradiciones inherentes a una nación en particular. Ya que para que exista una consolidación nacional deben existir, a su vez, símbolos, representaciones y un pasado al cual remitirse. Habiendo definido anteriormente la identidad nacional como un conjunto de creencias, podríamos, por consiguiente, argumentar que la creencia necesita también un pasado al cual remitirse, y dicho pasado puede ser inventado. La tradición inventada[10] se sistematiza por su repetición y su continuidad con el pasado, y de ser posible, con un pasado que le brinde coherencia.

De todos modos, no podrían ignorarse los instrumentos legales que se utilizaron a partir del surgimiento de las naciones modernas. La primera Constitución moderna fue la de los EE. UU. en 1787 y fue en simultáneo con el proceso de consolidación nacional. Podemos seguir exponiendo la tesis de que la concepción moderna del mundo es la contraposición a las ideas monárquicas. Las constituciones modernas son leyes supremas, que pueden establecer garantías a los habitantes de

8 Ernest Renan, ¿Qué es una nación?, p. 62.

9 Hegel, Introducción a la historia de la filosofía, p. 66, 1832.

10 Concepto de Eric Hobsbawm en La invención de la tradición.

una nación y organizar a los poderes del Estado. Son y surgieron como una garantía en contra de la arbitrariedad del monarca.

Si hablamos de nacionalidad y de ciudadanía, no podríamos no mencionar la injerencia del discurso político como herramienta, ya que desde las distintas esferas de poder se puja por un concepto totalizador de nacionalidad. Dicho discurso es sustancialmente retórico, y como se había mencionado antes, el concepto política proviene etimológicamente del griego *polis* y fueron ellas las primeras formas de civilización. El análisis y el contraste de dos o más discursos es fundamental para comprender la disputa discursiva. De igual manera, debe analizarse la relación terminológica que existe dentro del mismo discurso o enunciado.

El lenguaje y, mayormente, el discurso, son percibidos como verosímiles. Una vez que el discurso se inserta dentro de una realidad social, es considerado natural. Dentro de la noción de verdad, lo verdadero es *uno* y no la multiplicidad, ya que la voluntad de verdad constituye a una sola verdad como principio ordenador. Por consiguiente, la disputa por una identidad nacional se daría con la finalidad de establecer una única identidad, ya que la verdadera identidad no sería lo múltiple, sino la única, y presuntamente verdadera. El discurso político busca, a través de una red interdiscursiva, imponer un modelo de ser nacional como único y verdadero. A su vez, va a confrontar con otros discursos, que al mismo tiempo, disputarán en el mismo campo. Desde aquí podemos disociar entre discurso político y científico, ya que este último puede discernir el conflicto conceptual que existe en el campo político, mientras que el contrario únicamente busca interpelar y convencer.

Si entendemos el concepto como un pensamiento concreto, es decir, no como lo vacío o lo abstracto, la identidad nacional no sería un concepto. Y, por consiguiente, tampoco sería una idea, ya que la idea es la continuidad con un concepto anteriormente dado, es el concepto realizado y en práctica. En efecto, la identidad nacional sería vivencia y

podría ser abordada desde la emocionalidad. Por este motivo, puede ser instaurada a través de un discurso político. A su vez, la identidad nacional se construye en contraposición con un *otro*. Ese *otro* es identificado como esencialmente incompatible, ya que el discurso lo construye como la antítesis. El *otro*, o la diferencia, es una unidad, no es diverso, es siempre abordado de manera vaga y simple.

Anderson, en contraposición a este argumento, plantea que una nación es una comunidad política imaginada como inherentemente limitada y soberana. Pero, al mismo tiempo, sostiene que no puede elaborarse una definición científica de nación, pese a que todos sepamos y estemos interpelados por su existencia. Si existe una disputa constante dentro de la nación, dada desde las instituciones y los espacios de poder, entonces, no podría existir dicho concepto. Esto no quiere decir que la nación en sí no exista. Como se había planteado anteriormente, se podría definir desde la emocionalidad y la vivencia. Por ende, el sentimiento de igualdad es inherente a la organización nacional, ya que a lo que contribuyó la esencia nacional, a partir del sistema legal, fue a disminuir las desigualdades entre ciudadanos. El Estado se volvió entonces, en términos hegelianos, en el garante de la libertad. La modernidad, que trajo paulatinamente el sistema nacional a todos los sectores sociales, tenía como principal lema la idea de libertad.

La igualdad ante la ley es entonces una de las premisas básicas de la nación. A su vez, lo que este sistema trajo fue el traslado del poder mediante el sometimiento y la violencia hacia la regulación por parte del aparato estatal. No obstante, lo que se permitió a partir del ascenso de la moral pública, las instituciones y el surgimiento de nuevos derechos fue que dicho poder pueda ser disputado y discutido en su totalidad.

En la Constitución nacional del siglo XIX en la Argentina, más específicamente en el artículo dieciséis, se subrayaba la inadmisión nacional de prerrogativas de sangre, títulos de nobleza y la de igualdad ante la ley. El artículo catorce hacía alusión a los habitantes de la na-

ción y nombraba el derecho a trabajar, permanecer y salir del territorio argentino, a educarse y publicar ideas sin censura. El artículo diecinueve, junto con el dieciocho, constituían, a mi entender, los principios de la Constitución en materia de garantías y derechos. Estos dos, junto con los anteriores, conforman los derechos nacionales básicos de Occidente. Hablan de propiedad, orden y moral pública, igualdad ante la ley, impuestos y cargas públicas.

Cabe destacar que, si bien existían sistemas legales precedentes a la nación, las constituciones se redactaron con la finalidad de fortalecer dicho tipo de organización. Como denominaría Alberdi, la dialéctica viva entre el hecho y el derecho[11]. En efecto, podemos argumentar que la Constitución nacional y el sistema legal en sí inciden en la idea de un ser nacional. Por otra parte, en lo que sustancialmente compete a este ensayo, no creo taxativamente que se pueda hablar de una historia de las ideas radicales o peronistas en torno a un ser nacional, ya que dichas ideas se reformulan, se resignifican y siguen desplegando sentidos actualmente en torno a una identidad. Por ende, no se podrían encasillar estrictamente en una historia de las ideas. Igualmente, intentar remitirnos a su génesis podría contribuir a explicar su retórica y discurso, aunque la multitud de ramas ideológicas dentro de ambos partidos prueben su ambigüedad.

No obstante, si hablamos de cómo el bipartidismo argentino creó una identidad durante el siglo XX, deberíamos remitirnos primordialmente a los gobiernos liberal–conservadores, con sus comienzos en 1880, en la presidencia de Julio A. Roca, cuyas ideas iban a tener una gran injerencia en los próximos gobiernos del mismo ideario político. A estos tipos de gobierno se los denominó como regímenes oligárquicos. Se conformaban en gran parte por intelectuales positivistas, como Joaquín V. González y Eduardo Wilde. El poder estaba en ma-

11 Juan Bautista Alberdi, Política y sociedad en la Argentina, p. 12, Biblioteca Ayacucho.

nos de unos pocos y sucesivamente se recurrió al fraude para ganar las elecciones.

Esta etapa duró hasta 1916 e identificó en ella tres grandes quiebres. El primero se dio en 1890, con la denominada Revolución del Parque, cuando los disidentes al régimen conservador se agruparon en lo que se denominó la Unión Cívica, un grupo heterogéneo formado por Leandro N. Alem, Bernardo de Irigoyen, Hipólito Yrigoyen y José Félix Uriburu, entre otros. Esta unión entre civiles protestaba en contra de la corrupción interna del gobierno y pedía por el sufragio universal. El segundo quiebre que identifico ocurrió con el levantamiento armado cívico–militar que se dio en 1893 en manos de la ya consolidada Unión Cívica Radical, que fue también frenado por el gobierno conservador. El último quiebre con el régimen conservador en el país se generó fundamentalmente en la inmigración. Es decir, su fomento por parte de la oligarquía en el gobierno de Figueroa Alcorta produjo, paradójicamente, el efecto contrario. El espectro ideológico importado, fundamentalmente por los italianos del sur, trajo al anarquismo y al socialismo como principales ideas políticas, las cuales eran contrarias a los intereses conservadores.

La élite gobernante no ignoraba, de todos modos, que su hegemonía y monopolio del poder eran frágiles desde sus comienzos. En concordancia con la tradición positivista, se pretendía sustraer lo político de otros campos como la economía, y por el contrario, hacer énfasis en el tecnicismo. El discurso de Roca giraba en torno a la paz y la administración. La terminología *liberal–conservador* era, entonces, un mero desplazamiento de estos dos significantes, puesto que la paz era asociada con la no revolución y no protesta, es decir, el conservadurismo en términos culturales, y la administración era la económica, en términos liberales.

En el comienzo del siglo XX empezó a gestarse un nuevo modelo sindical. La Federación Obrera Regional Argentina (FORA) se

creó en 1901 y poseyó una clara impronta anarquista. El auge del modelo agroexportador había ocurrido en los años anteriores, y para ese entonces, la industria abandonó su papel secundario y comenzó a tener más relevancia en la economía exportadora. La Semana Roja, ocurrida en mayo de 1909 durante la presidencia de Figueroa Alcorta, debilitó aún más la imagen del conservadurismo. La democracia popular crecía como aspiración en el país a partir del binomio criollo–inmigrante.

Leandro N. Alem, cuyo padre, Leandro Alen, había sido colgado por haber prestado servicio en la Mazorca, la maquinaria policial rosista, se posicionó en principio como uno de los jefes cívicos revolucionarios. Su desenlace paterno lo atormentaba, y por ende, decidió cambiar su apellido a Alem. El jefe cívico argumentaba que no había en ese entonces una república, ni administración, ni moralidad, y que la política se había convertido en una máquina lucrativa. Y, en efecto, lo fue. La cantidad de inversiones extranjeras creció exponencialmente, y junto con el auge del modelo agroexportador, la Argentina logró ubicarse dentro de las potencias económicas a nivel mundial. No obstante, la corrupción en el Estado y el rechazo al sufragio universal eran moneda corriente en estos períodos.

En 1902, durante la presidencia de Julio A. Roca, la oligarquía incumplió la Constitución sancionada en 1853, sancionando la Ley de Residencia, que autorizaba al gobierno a expulsar a los extranjeros que se involucraran en los conflictos sociales. La necesidad de un sufragio universal comenzaba entonces a ser necesaria para una consolidación nacional eficaz. La oligarquía sabía que el país estaba cambiando debido a las grandes corrientes inmigratorias y que era necesario adaptarse a estos cambios. Carlos Pellegrini, en su discurso en el Senado de 1906, se pronunciaba a favor de la igualdad de derechos para todos los argentinos con la premisa de modernizar la vida política y otorgar una amnistía para los revolucionarios, que no buscaban más, según el

propio Pellegrini, que reivindicar sus derechos. La disociación entre progreso y democracia no era posible.

El positivismo que venía desarrollándose en los ámbitos intelectuales encontró su propio final en el principio del siglo XX. Como diría Horkheimer, el positivismo es tecnocracia filosófica. En el positivismo moderno, la forma correcta de pensamiento era proveniente de las ciencias naturales, ante todo de la física[12]. Recalco esta idea, porque la idea de un ser nacional conservador, surgida a partir del final de la guerra civil en 1880, tenía un principal arraigo en estas corrientes, en los valores burgueses de la época posterior a la Revolución Industrial, y en una fuerte ética protestante. Los valores cívicos de los radicales eran la antítesis. Si bien he mencionado los tres hechos de disrupción política a los regímenes oligárquicos, no he hecho hincapié en las críticas intelectuales a los modelos positivistas en lo social. Luego de la Revolución Industrial, la ética calvinista siguió desplegando sentido, incluso en la Argentina. No se pensaba desde el positivismo que el sinsentido pudiera irrumpir en la disposición de la sociedad. La elección de Hipólito Yrigoyen, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, demostró que la voluntad general no era la oligárquica, sino la cívica y popular. El ciudadano nacional debía entonces poseer una gran conciencia cívica.

El ciudadano radical era el sujeto de clase media. La inmigración en los principios del siglo XX contribuyó a que el panorama político cambiara, y se consolidara un gobierno con más apertura hacia nuevas ideas. A partir de 1916, el radicalismo se dividió en dos facciones, los yrigoyenistas y los antipersonalistas. Hipólito Yrigoyen, sobrino de Alem, tenía un discurso conciliador. Su retórica fue, utilizando la terminología de algunos autores occidentales, de una impronta populista. Buscaba una articulación entre la clase terrateniente, los obreros y las clases medias.

12 Max Horkheimer, Crítica de la razón instrumental, 1947, p. 80.

Naturalmente, la oposición a la tradición intelectual positivista era, según mi criterio, la raíz de este nuevo movimiento político. A sabiendas de que Yrigoyen poseía influencias del krausismo, el cauce entre el materialismo y el idealismo, podemos decir que parte de su pensamiento y doctrina se basó en dicha filosofía. De todos modos, esta forma de pensamiento no tuvo demasiada repercusión nacional dentro del pensamiento político. Y, en ese mismo eje, me niego a pensar que la aparición de la democracia popular haya sido consecuencia de ella. Esta época nos deja ensayar una tesis sobre el ser nacional, ya que los niveles de inmigración crecían exponencialmente; el ser nacional era el resultado de la voluntad de las mayorías. Si bien el fraude era una práctica fundada dentro de los regímenes oligárquicos, el estallido sociopolítico, fruto de la primera revolución de 1890, obligó a renunciar al entonces presidente Juárez Celman. Figueroa Alcorta tuvo el costo político de la Semana Roja. Las ebulliciones sociales surgieron, y pese a la corrompida institucionalidad de ese entonces, tuvieron incidencia en la política nacional.

Si quisiéramos, entonces, hacer una interpretación dialéctica de la realidad social de principios de siglo XX, podríamos tomar dos caminos. Podríamos caracterizar como tesis y antítesis a la caída del gobierno de Rosas y el comienzo de los gobiernos liberal–conservadores, y luego, identificar a la síntesis como la aparición de la fuerza cívica del radicalismo. De todas maneras, esto no sería pertinente en términos de lógica política. Empero, la tesis y la antítesis han sido, como ha demostrado la historiografía, los gobiernos liberal–conservadores y las fuerzas cívicas opositoras, para luego conformar como una síntesis al primer gobierno radical asumido mediante el sufragio universal masculino.

Las revoluciones radicales no fueron con la finalidad de imponer un orden conforme a los intereses de un sector político en particular, sino que fueron con la intención de poner al mismo tipo de gobierno, en

manos de una voluntad nacional. La emocionalidad que caracterizaba el discurso radical intentaba componer un nuevo modelo de patriotismo. El Partido Socialista acusaba al radicalismo, una vez en el poder, de no defender intereses legítimos, sino de simplemente consensuar con las mayorías. El discurso político tenía una notable carga emocional debido a que guardaba como una de sus principales finalidades la creación de un ser nacional. Desde las masas populares organizadas surgió una clase media argentina con grandes aspiraciones políticas. En todos los sectores no oligárquicos, la democracia popular era una aspiración, y construía el deseo popular. El gobierno radical de Yrigoyen apoyó el movimiento estudiantil de la Universidad Nacional de Córdoba, que luego desencadenó en la Reforma Universitaria de 1918.

De todos modos, pese a la conquista de derechos civiles, la inmigración puso de nuevo en aprietos al gobierno nacional, con la influencia de la Revolución rusa en 1917, se desencadenó la Semana Trágica, en 1919, que consistió en la represión y expulsión de obreros del país. Anteriormente, el Estado había surgido como un nuevo mediador entre la clase obrera y los empresarios, y atenuó la política represiva ante las huelgas. El gobierno de Alvear contó con el contexto de posguerra (1922–1928) y produjo un crecimiento en la industria nacional y suba del salario real. Pese a que Alvear tenía una impronta más conservadora, los valores sobre la voluntad de las mayorías y la democracia popular se mantenían.

El discurso radical pretendía generar una disrupción en el ser nacional, para que dejara de ser el ciudadano conservador y pasara a ser un civil con derechos, con participación política y social. En consecuencia, si la identidad nacional es vacía y abstracta, la única forma que tiene de construirse o cambiarse es a través de un discurso político. A partir de ello se puede consensuar y hegemonizar. La cultura popular es resultado de la voluntad de las mayorías. No existe, en consecuencia, ninguna cultura que no sea popular. De hecho, la palabra etimológicamente proviene del latín *populari*s, que significa lo relativo al pueblo.

El peronismo tuvo, a mi entender, su principios luego de la Década Infame, que comenzó después del golpe al presidente radical Hipólito Yrigoyen en 1930. Un grupo de militares nacionalistas se levantaron el 4 de junio de 1943 en contra del último presidente de la Década Infame, Ramón Castillo. Los dirigentes sindicales Ángel Borleghi (comercio), Francisco Capozzi (La Fraternidad) y Juan A. Bramuglia (Unión Ferroviaria) decidieron formar alianzas con el gobierno militar. Estos sindicatos eran percibidos como comités políticos del gobierno de facto, y se los acusaba de excluir la lucha por los intereses de la clase trabajadora y la solidaridad de clase.

La principal disputa político–electoral se daba entre el Partido Laborista y la Unión Democrática. Estas disputas no distaban de ser violentas. La Unión Democrática, compuesta por la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, el Partido Comunista y el Partido Demócrata Progresista, denunció en severas ocasiones ataques a actos partidarios por parte de sus opositores. El diputado socialista Alfredo Palacios pronunció un discurso en 1946 donde ya por entonces denunciaba la acción de *someter a los sindicatos a una burda intimidación del régimen corporativo fascista, repudiado por los trabajadores de todo el mundo.*

El discurso de Perón era áspero y hostil. Durante su campaña, promulgaba que no votar por el laborismo significaba *un acto indigno a la lealtad debida*. Comenzó a implementar la polarización histórica del país, siempre desde una postura exacerbada, haciendo referencia a enemigos internos. Se le denunciaba una complicidad con el nazismo. Los aliados de la Segunda Guerra Mundial pedían abrir investigaciones sobre el Partido Laborista. Un eslogan de campaña de la Unión Democrática sostenía *cerrar el paso al nazismo* y aclamaba por el voto popular.

El general Juan Domingo Perón asumió la Secretaría de Trabajo, en el gobierno militar de Edelmiro Julián Farrell, y sancionó medidas como la extensión de la indemnización por despido a todos los traba-

jadores, el estatuto del peón de campo y del periodista, la creación de escuelas técnicas para obreros, la firma de 470 convenios colectivos para obreros y empleados, entre otras medidas. La alianza entre los sectores sindicales y Perón generó un descontento en los sectores más conservadores de la sociedad. En 1945, una multitud de trabajadores en un acto de la CGT (Confederación General del Trabajo) pidió por Juan Domingo Perón y su candidatura a presidente. Perón, con su base sólida en el Partido Laborista, supo consensuar entre los sindicatos adheridos a sus medidas. El exministro de Trabajo asumió la presidencia en 1946 con el 55% de los votos.

El 17 de octubre de 1945 iba a volverse, para los peronistas, un símbolo de lucha social y política. La figura de Perón en ese entonces venía siendo atacada por las mismas facciones militares debido a la aceptación política que venía acumulando. Las medidas políticas a favor de los obreros se veían favorecidas por su contraste con la Década Infame, que había sido de gran represión y de una ineficaz organización social y sindical. Sin embargo, durante la Década Infame, Perón se desempeñó como ayudante de campo del ministro de Guerra, Manuel Rodríguez, durante la presidencia de Agustín Justo. A su vez, participó en el golpe que derrocó a Yrigoyen en 1930. A partir del golpe del 30, los militares iban a tener una total injerencia dentro de la política nacional, una característica que me propongo contrastar más adelante.

El concepto que me es prudente utilizar para analizar sociológicamente el 17 de octubre es el de *iconoclasia laica*[13]. La noción de iconoclasia hace referencia a la destrucción de símbolos religiosos en una cultura determinada por disidencias ideológicas. Daniel James lo convierte en un oxímoron, agregándole la característica de laica, ya que los actos vandálicos contenían una clara impronta ritualista. Las universidades, los periódicos y los bares porteños eran atacados por ser antiperonistas.

13 Concepto utilizado por el historiador británico Daniel James en su ensayo: El peronismo, la protesta de masas y la clase obrera argentina.

Estos proletarios se expresaban en contra de las creencias burguesas, y a su vez, buscaban corromper el orden social establecido. La violencia poseía un claro carácter ritualista. Se identificaba a los "enemigos" por la manera de vestir o peinarse. Los manifestantes peronistas iban al centro porteño sin vestir camisa, lo cual significaba una anomalía que iba a convertirse en un símbolo político: los "descamisados". Los "cabecitas negras" serían señalados por la oposición política, desde la derecha hasta la izquierda, y por los periódicos y la prensa iban a ser nombrados con una terminología despectiva.

El nacimiento peronista poseyó la clara matriz de la lucha de clases. Esto no significa que el peronismo, desde sus comienzos, haya sido un partido con una tendencia comunista, ya que claramente se identificó como hostil hacia las izquierdas. No obstante, los enemigos políticos del peronismo mostraban el desprecio de una clase obrera migrante hacia una burguesía urbana, con otros intereses de clase. El movimiento obrero y sindical se volvió profundamente peronista. La manera de razonar del peronismo iba a ser desde una matriz de lucha de clases, pero poseía la forma inequívoca de los movimientos de masas europeos, como el fascismo y el nacionalsocialismo.

Luego de su asunción, Perón diluyó el Partido Laborista y centró el espectro partidario en torno a su figura, creando el Partido Único de la Revolución Nacional. Estableció medidas como el aumento del gasto público social, la expresión de las inquietudes de una clase media de origen migratorio, la nacionalización de principales sectores de la economía y la inauguración de una forma de crecimiento basada en el mercado interno. Estas mismas medidas fueron planteadas también por sus opositores, como fue en el caso de la UCR (Tamborini–Mosca). En esta época, se abrió un gran clima de confrontación y resentimiento. El Poder Ejecutivo incidía directamente sobre el Congreso, deteniendo y censurando a legisladores opositores que hablaran en contra del proyecto nacional. En este mismo eje, el gobierno sancionó

la Ley de Desacato, que agravaba las penas para los que cuestionaran a los funcionarios públicos. Con el control de las masas, el Ejército y la Iglesia católica, el movimiento peronista, que se percibía con un gran futuro, tuvo poca tolerancia con los disidentes. La huelga ferroviaria que tuvo lugar en 1951, encabezada por obreros socialistas de La Fraternidad, fue reprimida por la policía y por la Ley de Seguridad del Estado, la cual planteaba un procesamiento a aquellos que no asistieran al trabajo.

El PJ (Partido Justicialista), antes conocido como Partido Peronista, fue uno de los partidos que más logró perpetuarse en el poder a nivel latinoamericano, junto con el Partido Revolucionario Institucional de México (PRI). Podemos trazar una analogía entre los gobiernos de Juan Domingo Perón en la Argentina, Lázaro Cárdenas en México y Getulio Vargas en Brasil, debido a su época de ascenso y a sus medidas económicas estatistas, en concordancia con la situación económica mundial. Los gobiernos populistas manifestaron una gran tendencia a formar movimientos en vez de partidos políticos, con la intención explícita de formar coaliciones policlasistas entre las sociedades de masas. Podemos definir un gobierno populista, desde la perspectiva de Gino Germani, como "una forma de dominación autoritaria que incorporaba a los excluidos a la política" (De la Torre; 2013) o desde una perspectiva marxista, como una táctica de dominación política llevada a cabo por los sectores dominantes para anular la autonomía de las diversas clases sociales.

El relato peronista no vaciló en demostrar su hostilidad en contra de sus opositores. El mismo general Perón polarizó la cultura nacional entre el "pueblo" y el "antipueblo". La propaganda en la educación era algo culturalmente novedoso y el peronismo no tardó en tener su incidencia en los aparatos generadores de cultura, una incidencia que años después iba a generarles un gran rédito político. El ámbito intelectual se dividió y las interpretaciones sobre el 17 de octubre fueron variadas.

Jorge Luis Borges escribió, a mi entender, su obra más política titulada "La fiesta del monstruo". Este cuento, que relata junto a su colega escritor Adolfo Bioy Casares, describe una visión de desprecio hacia la figura del propio Perón. El cuento narra un viaje de simpatizantes peronistas en un camión y el autor muestra su clara ideología al describir al narrador como un vulgar, mostrando una opinión peyorativa hacia el simpatizante peronista con expresiones como pie plano, panza hipopótama o pescuezo corto. "El monstruo" claramente era en referencia a Juan Domingo Perón. Por otra parte, el escritor Leopoldo Marechal tuvo una visión antagónica al describir a la jornada como parte de la "Argentina invisible que algunos habían anunciado literariamente" y en afirmar que en ese día él se volvió peronista. Fue también el caso de Rodolfo Walsh, que no iba a adherir a la doctrina peronista desde sus comienzos, pero que luego se identificó con la izquierda peronista y presentó obras como *Esa mujer* (1963) en referencia a Eva Perón.

El peronismo tuvo correlación con el concepto de democracia cristiana, con una gran capacidad de asimilar diversos sectores sociales. Debido a la amplia capacidad de inclusión, el partido fue usualmente criticado y reconocido como escenario de conflicto, ya que siempre existió una gran variedad de ideas y divergencias. Su principal apoyo estuvo en las clases obreras. Las Fuerzas Armadas se reconocían como peronistas durante su presidencia. No obstante, la muerte de Eva Perón en 1952 y el gran aparato propagandístico oficial hicieron que la oposición exacerbara su antagonismo hacia Perón. Las leyes en contra de la Iglesia y la obstinación del presidente en categorizar al peronismo como el nuevo cristianismo hicieron que su gobernabilidad decreciera. El ejército, que había sido un factor clave durante las presidencias peronistas, formó paulatinamente una facción antiperonista, que luego concluyó en la Revolución Libertadora de 1955.

De todas maneras, lo característico del peronismo es que excedió la institucionalidad del propio partido fundante. Se extendió hasta los

sindicatos y la prensa. Lo característico de la retórica peronista fue la articulación de dos modelos políticos opuestos, el capitalismo y el comunismo. De hecho, identifico como tónica del discurso peronista a la relación pacífica entre capital y trabajo. El peronismo tuvo más incidencia en la consolidación de un ser nacional que el radicalismo. Esto ocurrió debido a que su discurso significó una ruptura con las relaciones de poder de ese entonces, y un quiebre en las formas de hacer política. Perón podía hablarles a los dueños de los medios de producción, y a los obreros, soslayando las desigualdades sociales. Este discurso era esencialmente retórico. Fue la inhibición de la lucha de clases.

Dentro de la reforma de la Constitución nacional de 1949, se resaltaba, concretamente en el artículo 37, que la propiedad privada cumplía una función social. El siguiente artículo planteaba que el capital debía estar al servicio de la economía nacional. En ese mismo eje, subrayaba que el Estado podía expropiar los servicios públicos que se encontraran en manos de particulares. Otra reforma significativa fue la posible reelección del presidente. De todos modos, la Constitución fue derogada con el golpe de Estado del general Lonardi en 1955. En ese momento, el peronismo tomó más preponderancia política debido a su proscripción. La mitificación de su líder y la constante expectativa de su retorno le otorgaban al movimiento peronista una característica única y singular. El vandorismo, con gran preponderancia opositora en el gobierno radical de Arturo Illia (1963–1966), demostró la gran capacidad de resignificación que podía tener el peronismo. Demostró que se podía prescindir de Perón para hacer peronismo.

Lo que el golpe de Estado de 1955 intentó fue una fallida restauración conservadora. Si bien el discurso peronista era binario y polarizador, esa distinción se exacerbó luego del golpe. Lo que, al mismo tiempo, se exacerbó fue el rol de los sindicatos. Luego, el radicalismo de Frondizi tomó un rumbo más conciliador con el sector peronista, intentando paulatinamente levantar su proscripción. El radicalismo,

si bien no estuvo proscripto en la misma medida que el peronismo, también atravesó una crisis política.

Si tomamos el caso del gobierno radical de Illia (UCRP) podemos identificar una gran debilidad democrática por parte del Estado, condicionada por las actores externos. Si bien se podría argumentar que en la década del 60 la democracia era débil, frágil, y la injerencia del contexto de Guerra Fría llevaba a los militares a buscar la toma del poder, los procesos se fueron repitiendo en las décadas posteriores. El gobierno de Arturo Illia logró aumentar el PBI un 8%. No obstante, se veía rodeado de huelgas por parte de la CGT debido a la Ley de Asociaciones Profesionales, sancionada por decreto, que permitía la ampliación de la participación obrera en sindicatos y limitaba el manejo de fondos económicos. De la misma manera, el Banco Mundial mostró su descontento por el congelamiento de tarifas eléctricas. Las facciones militares presionaban al gobierno radical para aplicar el plan Conintes. Los ataques de la prensa que rebajaban la figura de Arturo Illia, la amenaza de sublevaciones comunistas y las protestas del sector sindical hicieron que el gobierno sea percibido como débil y que un gobierno militar tenga la aceptación para asumir mediante un golpe de Estado.

El concepto de tradición inventada de Hobsbawm nos es útil para intentar comprender las bases de los partidos políticos. Es necesario y prudente inventar tradiciones, que luego demuestren coherencia con el presente político, para que las acciones partidarias puedan tener una justificación firme. En el partido radical, la ley de divorcio aprobada por el presidente Raúl Ricardo Alfonsín (1983–1989) fue previamente rechazada por el presidente Hipólito Yrigoyen (1916–1922) y este último asignó como funcionarios públicos a miembros del clero. Existieron contextos en los cuales el radicalismo apoyó y promovió la lucha armada, y en otros que los castigó aprobando leyes para erradicarla. Entonces, podemos sostener que las posiciones del bipartidismo en la

Argentina dependen del contexto social nacional e internacional. Lo mismo ocurriría, si comparamos al peronismo de las veinte verdades justicialistas, es decir, el peronismo clásico, con la rama peronista de John William Cook.

A partir de 1930, la política argentina dio un giro desfavorable. La inestabilidad política, los golpes de Estado y la poca participación ciudadana contribuyeron a que la identidad nacional se pusiera en crisis. No obstante, no podríamos reducir toda una interpretación de la histórica identidad nacional al discurso político de las dos fuerzas mayoritarias del país. Ambas fuerzas intentaron consolidar una identidad. Esta estuvo sujeta a los imaginarios de época, y a la situación internacional. La tercera posición de Perón fue clave en su retórica. Incluso, él se proclamaba como la síntesis entre el sistema capitalista de explotación y el sistema comunista. Luego, la inmigración a principios de siglo XX tuvo una injerencia sustantiva en la política nacional, consolidando otro modelo de país, este fue la contraposición al modelo conservador. Los intelectuales románticos que pensaron a esta república tuvieron, empero, mayor incidencia en la cultura que los partidos políticos modernos mencionados en este ensayo.

Las relaciones entre la identidad nacional y el discurso político son extensas, ya que ambas poseen la misma estructura. Podemos decir, por consiguiente, que el discurso político interpela mediante la noción de un ser nacional. La construcción de otro se da en ambos casos, y la impronta emocional es una característica indispensable. Habiendo abordado anteriormente en este trabajo el concepto de razón, desearía entonces plantear que la razón objetiva es la ordenadora del sistema nacional[14]. El nacionalismo no es razón. Los presocráticos y los primeros filósofos modernos sostenían la necesidad de un pensamiento universal, y este es el necesario para una consolidación nacional. Si

14 Se toma como referencia la distinción entre razón objetiva y subjetiva de Max Horkheimer, y por ende, se vuelve a plantear una razón objetiva como principio ordenador.

bien los discursos de la *teoría crítica* tenían su lógico arraigo con su contexto, me parece prudente definir a la razón instrumental[15] como impulsiva, emocional, no como razón. El imaginario de una nación se consolida a partir de un pensamiento universal y no subjetivo. La pregunta por la identidad nacional es, al mismo tiempo, la pregunta por la esencia, y dicha esencia es construida. En síntesis, no se podría definir de manera total a la identidad nacional desde el bipartidismo argentino, sin tener en cuenta las tradiciones culturales como las artes, la literatura y la prensa. Si bien los discursos partidarios mencionados anteriormente poseen la intención de construir dicha identidad, esto es inevitablemente algo utópico.

15 La razón instrumental es también en términos de Horkheimer, y de lo que el autor identifica como la causa de las tragedias del siglo XX.

La historia argentina contemporánea: el arte retórico del discurso

1. El discurso subversivo

En el análisis de la política partidaria, resulta tanta la confusión que, al mismo tiempo, parece imposible discernir algún concepto. La contradicción en este campo es inevitable. Es decir, si anhelamos concebir la política mediante un análisis del discurso, veríamos una contradicción constante. Los hechos pueden no coincidir con lo discursivo. Por ende, dentro de la búsqueda de una verdad, se debería prescindir del discurso y retomar únicamente la praxis. Este tema se va a tratar en estos ensayos, que son indefectiblemente contradictorios, y en suma, buscan advertir las contradicciones dentro de los propios espacios políticos. Para la concreta realización de un hecho político se necesita de un discurso y una praxis. Este dualismo parece insoslayable. Por otro lado, es válido de igual forma preguntarse si realmente dentro del espectro político partidario existen las ideologías.

Hablar de subversivos, especialmente en la Argentina, conlleva polémica y desacuerdos. Sobre todo, si nos situamos en 1970. Etimológicamente, el término proviene del latín *subversio*. En términos lingüísticos, significa alterar un orden social, político o moral. La osadía de nombrar a un movimiento o individuo como subversivo se da desde el poder, haciendo alusión a su postura antiinstitucional. El movimiento

político que busca subvertir un orden social es en consecuencia subversivo. No obstante, y al margen de la definición concreta, informo al lector que voy a hacer énfasis solamente en las justificaciones políticas y éticas de las agrupaciones que eran consideradas de esta forma. Por nuestra historia y recorrido, el significante que se produce al emplear este término puede adquirir distintos conceptos. Y, desde una postura lógica, el subversivo puede ser percibido como tal en el momento en que actúa y detener a un individuo por una sospecha sería absurdo. Otra cosa que me parece pertinente aclarar es que, así como el Estado es el único capaz de corromper los derechos humanos, tal como su concepto lo indica, tampoco podríamos hablar de un Estado subversivo. Al acto en el que se emplea la fuerza estatal de manera ilegal se lo llama terrorismo de Estado.

Una gran revolución cultural tuvo lugar en la década del 60 a nivel mundial y un gran impacto en los años subsiguientes. Significó el gran auge de la juventud y los cambios en las prácticas cotidianas. Si bien hubo características similares en la Europa y Norteamérica de la década del 20, sobre todo en la Alemania del Weimar, en este caso la juventud se diferenciaba en gran medida de las otras generaciones. La música rock constituyó la bandera representativa, la diversidad sexual comenzó a ser visibilizada y en parte más aceptada, y el hecho de ser joven representaba estar viviendo el pleno desarrollo humano. Uno de los hechos más llamativos fue la alteración o resignificación de las corrientes marxistas. Dichas corrientes poco tenían que ver con la Revolución de Octubre o las posteriores políticas de Stalin. La izquierda progresista surgió en esa década.

El *materialismo dialéctico* no pudo sostener su base en el proletariado y la posterior corriente de pensamiento basó su doctrina en la crítica a las instituciones y la necesidad de su deconstrucción. El colectivo LGTB (si bien no era percibido mediante esta terminología en ese entonces) comenzó a levantar sus banderas y a reclamar por sus derechos

civiles. Sin embargo, y pese a este cambio de paradigma, no podemos plantear a la izquierda como algo unívoco. Incluso en América Latina, la adaptación a las democracias liberales por parte de los movimientos de izquierda, y las disidencias en cuanto a las formas de tomar el poder fueron centrales. La "cultura del marxismo" impregnó la vida intelectual y las universidades para la transformación social y política. De todos modos, desde esta época y *a posteriori*, el proletariado no pudo surgir como clase social para la toma de los medios de producción y el consecuente cambio sociopolítico. La revolución cultural tuvo su influencia en la Argentina durante las décadas del 60 y 70.

El fin de la Segunda Guerra Mundial había dado paso al comienzo de la Guerra Fría y los conflictos se venían acrecentando a partir de esos tiempos. La polarización mundial no solo figuraba en límites geográficos, sino también en duras discrepancias ideológicas. La guerrilla, la propaganda y el intelectualismo se volvieron armas políticas.

El contexto social durante la década de los años 70 en el país, en términos políticos, era caótico. A partir de la última presidencia de Juan Domingo Perón (1973–1974) la denuncia de los infiltrados marxistas en el movimiento peronista y el repudio a la subversión en las federaciones obreras se acrecentaron. Las fuerzas militares trazaban vínculos cada vez más próximos con el Poder Ejecutivo. La represión ilegal y la violencia se hacían cada vez más presentes. El ministro de Bienestar Social, López Rega, las lideraba desde su posición hegemónica. Si bien era el que ejercía el mando, sin embargo, no era el único involucrado. En representación del Partido Justicialista y la ortodoxia sindical, constituía un gran y represivo aparato estatal. López Rega asumió el 25 de mayo de 1973 y disoció su acción en dos ámbitos, político y lo político no público, ilegal y represivo. Este segundo campo de acción se llevaba a cabo en la clandestinidad, a partir de un aparato de tareas llamado Alianza Anticomunista Argentina (Triple A). Utilizaba el presupuesto del Estado para perseguir a los movimientos marxistas

y peronistas de izquierda, efectuar métodos de tortura y secuestro. En su imagen pública, ejercía la acción social. Se dedicaba a tareas como la asignación de subsidios y construcción de viviendas.

La figura del subversivo fue construida desde un discurso político. Principalmente, fue combatida desde el Estado por la doctrina "lopezreguista", denunciando a los infiltrados dentro del movimiento peronista. Esta agrupación oficialista se componía por la Concentración Nacional Universitaria (CNU), el Movimiento Nueva Argentina (MNA) y parte de la militancia sindical que tenía como objetivo erradicar el accionar subversivo de las fábricas. En paralelo, López Rega formó la Juventud Peronista de la República Argentina con el objetivo de garantizar la pureza doctrinaria. En septiembre de 1974, el general Leandro Anaya, jefe del ejército desde 1973 hasta 1974, pronunció un discurso por la muerte del general Jorge Oscar Grassi, fallecido en un ataque terrorista. Dicho discurso logró reflejar las ideas de erradicar la subversión y que la represión sea delegada al ejército. Anaya sostuvo: "El ejército actuará con todos sus medios cuando el pueblo lo reclame a través de sus representantes". Esta idea se palpitaba entre los civiles y la clase política.

La situación económica era crítica y considerada de las peores en la Argentina hasta ese momento. De manera simultánea, se dio un contexto de hiperinflación, recesión económica y una crisis total del sector externo. Durante la presidencia de María Estela Martínez de Perón (1974–1976), sucesora de Juan Domingo Perón luego de su muerte, el Instituto Americano de Investigaciones Económicas sostuvo que el rotundo fracaso se debía simplemente a las erradas ideas económicas del gobierno, sustentadas en un "emisionismo desenfrenado" (330% de inflación anual), un "distribucionismo" forzado y una estatización creciente. El Estado parecía no tener ningún tipo de autoridad, independientemente de las personas y funciones.

El titular del comité nacional de la Unión Cívica Radical, Ricardo Balbín, descreía por completo de la idoneidad de María Estela Martí-

nez de Perón. En su discurso decía: "La señora de Perón tuvo mucho tiempo los ojos vendados, y al quitársele las vendas para observar el sol, queda deslumbrada y no ve ni el sol ni a quienes lo rodean". La figura de Isabel Perón era rebajada por la oposición política. El titular del comité nacional de la UCR se refirió al ejército de manera positiva y sostuvo: "Creo que este es un ejército nuevo, una fuerza armada con un gran contenido de orientación democrática y están en un profesionalismo natural y lógico. Cada vez que han debido opinar en estos últimos tiempos no han eludido razonamientos económicos o sociales, lo que demuestra que tienen una intensa preocupación y demuestra ello por qué defienden con tanta fuerza y calor el sentido institucional del país".

La defensa a la institucionalidad formó parte del eje central del discurso del gobierno. El exterminio de la subversión siempre se llevó a cabo en nombre del orden. El Estado era su garante. Presuntamente, el aparato estatal no podía equivocarse en usar su fuerza legítima.

Para los últimos meses previos al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la presidenta María Estela Martínez de Perón carecía de popularidad y aceptación. En un acto realizado en la provincia de Tucumán en septiembre de 1975, exponía sus dificultades para gobernar el país y criticó a su oposición política. Concluyó: "Si soy mala y no les sirvo, que gobierne otro". Antes que esto, la presidenta había decretado la ilegalidad de Montoneros, obligando a la agrupación guerrillera a pasar a la clandestinidad. Los peronistas de izquierda denunciaban el avance de la ofensiva oligárquica e imperialista dentro del gobierno nacional. Los enfrentamientos dentro del movimiento peronista aumentaban. La disputa se volvió muy hostil, sin embargo, llevó años para que Mario Firmenich, secretario general de la agrupación Montoneros, legitime el golpe de Estado en una entrevista que brindó al escritor y premio Nobel de literatura Gabriel García Márquez:

"Desde octubre de 1975, cuando todavía Isabelita Perón estaba en el gobierno, ya sabíamos que en un año habría golpe. No hicimos nada

para impedirlo porque, en definitiva, también el golpe formaba parte de la lucha interna del movimiento peronista".

La incapacidad de establecer un orden por parte del justicialismo allanó el camino para que las Fuerzas Armadas tomaran el poder. El ministro de Defensa Jorge E. Garrido venía llevando a cabo reuniones con el general de la brigada Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Massera y el brigadier de la Fuerza Aérea Héctor Luis Fautario durante 1975, con la finalidad de erradicar la subversión. Antes del golpe de 1976, la incidencia de los militares en el Poder Ejecutivo era visible, y no solo en el organismo gubernamental, sino que en casi toda la clase política. La lucha armada y la represión se intensificaron para 1976; había una convergencia en los sectores mayoritarios de la sociedad para legitimar el uso de la represión ilegal.

El general Jorge Rafael Videla, luego de su visita al congreso en 1975, manifestó:

"Repetiría lo que dije en Córdoba y en Tucumán; con pleno optimismo. El ejército mantiene su posición institucionalista, es decir, de respeto a las instituciones y al libre juego en que estas deben desenvolverse, situación existente de pleno en la república, en estas circunstancias. Por ello, la posición del ejército es totalmente optimista".

El respeto a las instituciones desembocó en un conservadurismo vehemente y en el asesinato y secuestro de miles de personas. Paradójicamente, el Proceso de Reorganización Nacional se dio desde la clandestinidad, es decir, desde la ilegalidad. Lo que cabe recalcar aquí es que, sin un discurso, el último golpe de Estado en la Argentina no podría haber sucedido. Pese al conservadurismo de las Fuerzas Armadas y a su desprecio por la política partidaria, el discurso para la toma del poder fue direccionado hacia una transición paulatina desde el justicialismo hacia el ejército. Haya o no una asunción al poder por vía democrática, se necesitó cierto consenso en la población. Si bien la

figura del subversivo fue construida a partir de un discurso, no quitó el hecho de que haya habido subversión en la década del 70. Las ejecuciones y los secuestros fueron también bandera política de las agrupaciones guerrilleras. La distinción aquí fue la disposición del aparato estatal y la gran asimetría en la supuesta "teoría de los dos demonios". El conflicto se desenvolvió mediante la violación sistemática de los derechos humanos.

Por otro lado, puedo reconocer una tónica en la justificación de la lucha armada y en los genocidios de los años 70. Al margen de la injerencia del contexto de Guerra Fría, la teología de la liberación, con gran influencia teórica e ideológica en este proceso, surgió en Latinoamérica en el decurso de los años 1950 y 1960, con una génesis en la opción preferencial por los pobres y los sectores marginados. En paralelo, la "teología del pueblo" tomó lugar en la Argentina mediante figuras como Lucio Gera (sacerdote católico y teólogo) o Justino O' Farrell (sociólogo y decano montonero de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires). Dicha teología fue una de las principales inspiraciones de los movimientos revolucionarios de la época que basaban su acción en la lucha armada. Había en ella un giro semántico y articulatorio de la corriente marxista, donde la idea de lucha de clases era reemplazada por el combate del pueblo contra el antipueblo. Sin embargo, pese a la variable semántica, la praxis era la misma.

La asunción del papa Juan XXIII en 1958 y su doctrina progresista influyó en el clero nacional orientando a la política eclesiástica hacia la liberación nacional. En 1968, luego de reuniones entre los sacerdotes progresistas nacionales, se formó el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. Esta nueva vertiente de la Iglesia católica envió una carta al encuentro del episcopado latinoamericano en Medellín condenando la violencia en la región. A partir de esta "Carta para los sacerdotes de Medellín" se comenzó a hablar de la violencia en contra de los oprimidos y cómo ellos podían responder con violencia en contra de

sus opresores, ya que esta siempre iba a ser ínfimamente menor. El padre Carlos Mugica, principal referente del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, planteaba que el empresario iba a ser siempre un opresor, sin importar su ideología o su ética. Esta nueva visión marxista iba a tomar una posición firme dentro de la Iglesia católica e iba a confrontar con los sectores más conservadores de la jerarquía.

Si bien se podría argumentar acertadamente que existe un fundamento teológico en la composición del orden social, como la Reforma protestante de Lutero sobre la época moderna, en este caso, la justificación de emprender la lucha armada en contra de las clases opresoras vino desde la convergencia de la ideología de izquierda con el catolicismo. Los fundamentos religiosos también conformaron las doctrinas de otros movimientos guerrilleros latinoamericanos como el Frente Sandinista de Liberación Nacional o el Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Chile, entre otros. Desde una postura más holística, la concepción milenarista de la civilización colaboró con una necesidad reformista. Existió una analogía entre la visión escatológica del ser humano y el universo y la expectativa revolucionaria. Siguiendo este razonamiento, la liberación del sujeto y el impulso revolucionario podían articularse entre sí y la lucha se deslumbraba como algo lógico. Ambas corrientes concordaban en la necesidad de un mundo librado de sufrimiento e injusticias.

Gustavo Gutiérrez, filósofo, teólogo peruano y principal referente de la teología de la liberación, planteaba la necesidad de que las clases sociales emprendieran luchas contra sus opresores. El teólogo brasileño Hugo Assmann, en concordancia con Gutiérrez, sostenía que la lucha de clases iba a imponer la moralidad de las acciones. Por ende, no se debía escindir por completo la violencia de la lucha política. La violencia y la lucha armada podían ser métodos para alcanzar la liberación, una sociedad más justa y un mundo mejor. No obstante, el concepto de verdad, con un arraigo al concepto de bien, iba a resultar

el más controvertido, ya que no era necesario descubrir la verdad ni adaptarse a ella, sino crearla.

"Si el fin justifica los medios, y es bueno todo lo que fomente eficazmente la lucha de clases, la violencia, claramente definida en el terreno político, será también aconsejada en el terreno científico, en la presentación de ese cristianismo reinterpretado" (Lucas F. Mateo–Seco; 1051).

Esta teología buscaba diferenciarse de la tradicional, y fue ocupando lugar en las universidades públicas de la Argentina, con espacios destinados a jóvenes estudiantes. La agrupación peronista armada Montoneros fue fundada en el Colegio Nacional Buenos Aires con integrantes de la Juventud Católica. Camilo Torres Restrepo, sacerdote y guerrillero de la Iglesia tercermundista en Colombia, era la ilustre expresión de la ideología radicalizada por la Iglesia. La Juventud Católica, luego del fallecimiento del sacerdote colombiano, se transformó el Comando Camilo Torres, con el seminarista católico e intelectual Juan García Elorrio como guía espiritual. Entre estos espacios, el peronismo surgía como principal bandera en contra de los opresores y como herramienta legítima para el combate de la pobreza. Las ideas revolucionarias de John William Cooke y las ideas combativas del tercer mundo, siempre plasmadas en la lucha armada, eran la génesis del pensamiento de la agrupación. La obstinación de Cooke con unir al peronismo y al castrismo y transformarlos en movimientos locales para una revolución tomaba cada vez más protagonismo.

Las agrupaciones de resistencia a las dictaduras militares como las de Onganía (1966–1970) y las posteriores tampoco guardaban fuertes convicciones democráticas. Si bien de este hecho pueden desprenderse múltiples análisis, la democracia no era para la época algo valioso ni una virtud política para defender, ya que existía en una muy acotada medida. De la misma manera, el Cordobazo marcó un cambio en la organización social, con la presión y el desafío de miles de obreros y

estudiantes en contra del gobernador Caballero. La ciudad de Córdoba quedó en manos de los manifestantes. Esto significó la posibilidad de una resistencia directa, y la utilización del peronismo, por algunos sectores de izquierda, como institución partidaria.

El 25 de mayo de 1973, la formula Cámpora–Solano Lima se impuso con un 49,5% frente a Balbín (UCR) con un 21%. Desde este momento, nació la célebre frase "Cámpora al gobierno, Perón al poder". Fue el primer y único gobierno en el que iban a tener incidencia las agrupaciones guerrilleras Montoneros y Tendencia Revolucionaria. El regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina se veía cercano y la juventud más radicalizada crecía en su capacidad de movilización popular. En su asunción, el presidente Héctor Cámpora no buscaba promulgar de forma directa una revolución, sin embargo, llamaba indirectamente a una resistencia:

"En vísperas de asumir el Congreso de la Nación, el justicialismo ratifica su indeclinable decisión de alcanzar la unidad nacional, reconstruir el país y concretar la liberación, proyectándose solidariamente hacia América Latina y hacia todos los pueblos del mundo que luchan contra la dependencia y el imperialismo".

El presidente electo había logrado una aceptación por parte de la Unión Cívica Radical y la Alianza Popular Revolucionaria. La ideología peronista parecía ser la única capaz de consensuar y generar un ámbito democrático. Por otra parte, el discurso latinoamericanista iba a ser la gran bandera izquierdista en el respecto continente, y esto se mantuvo hasta nuestros días. Vamos a indagar sobre este discurso en los próximos ensayos. Podemos hablar, durante todo el siglo XX, de una puja o disputa entre los movimientos nacional–populares y las izquierdas tradicionales. De hecho, en las primeras apariciones del Partido Comunista en Latinoamérica, este iba a ser tildado de europeo y menospreciado por los sectores populistas.

América Latina representaba un continente asediado por el imperialismo. Un territorio cultural que no se pensó a sí mismo y fue víctima de ideas extranjeras, de manipulaciones corporativas por parte de las naciones dominantes. Desde el ámbito académico, iba a empezar a surgir una corriente con la intención de elaborar un paradigma contrahegemónico, una contrainformación. Salvador Allende, que estuvo presente en la asunción del presidente Cámpora, iba a acceder al poder en las elecciones chilenas del 3 de noviembre de 1970, apoyado por el frente socialista Unidad Popular. Fue la primera y única vez hasta la fecha que un presidente marxista accedió al gobierno mediante elecciones democráticas en América Latina.

En 1972, los chilenos Ariel Dorfman y Armand Mattelart produjeron en su país la obra *Para leer al Pato Donald* como denuncia a los métodos que utilizaba el imperialismo para la reproducción del orden burgués. Es decir, la lucha no únicamente se daba en el plano físico, sino también en el cultural. El libro contenía un análisis pormenorizado de los discursos del Pato Donald y una acusación a su falsa inocencia e ingenuidad. La tesis central del libro consistía en la emancipación y la descolonización. Si los niños seguían consumiendo esa propaganda en sus primeros años de vida, iban a seguir siendo víctimas del imperialismo. Este trabajo se realizó de manera orgánica al gobierno chileno de Salvador Allende. El presidente Héctor Cámpora recibió a Allende y al entonces presidente cubano, Osvaldo Dorticos Torrado, en su asunción

La incógnita que surge aquí es: ¿cómo un movimiento populista puede pasar por la resignificación extrema de llegar a plantear, desde una fracción determinada, una patria socialista? Una fracción que iba a mostrarse hostil hacia la burocracia sindical y los principales soportes del peronismo clásico. La opción viable era un peronismo sin Perón, que fue la idea que se mantuvo con discreción. John William Cooke, un joven diputado justicialista, representaba la doctrina izquierdista

del peronismo desde el congreso en los años 1946–1952 y fue uno de los principales referentes de las organizaciones guerrilleras.

Desde la óptica de la guerrilla montonera, el peronismo había fracasado como un modelo de integración y conciliación de clases. Sin embargo, en respuesta a la pregunta planteada en el párrafo anterior, la impronta nacional y popular dentro del movimiento podía llevar, con algunos cambios determinantes, a un movimiento revolucionario. Los montoneros creían que, mediante la lucha armada, el Partido Justicialista iba a resignificarse en un socialismo nacional. La transformación se iba a dar a través del justicialismo, siempre y cuando se eliminara a los enemigos internos.

Como podíamos suponer, existió un discurso antisubversivo y, de igual manera, un discurso subversivo. Este último contaba con fundamentos filosóficos claros. Ambos fueron aprehendidos por los principales partidos políticos en la Argentina. El común denominador del discurso subversivo recayó en el uso de la razón instrumental hacia la praxis, "el fin justifica los medios".

Esta época jugó un rol clave en las posteriores elecciones de 1983, ya que la caída de la dictadura militar y el repudio de la sociedad hacia ella iban a ser la bandera política del radicalismo. La intensidad de la violencia fue creciendo a lo largo de los años 70, lo que desencadenó en una época de horror y persecución.

La disputa de los años 70 en la Argentina afianzó sus bases sociales con el Cordobazo. No fue únicamente un reclamo estudiantil por un aumento de precios. Se trató de confrontar por un modelo de nación distinto. La guerra civil, si es que se me permite emplear este terminología, de los 70 fue ideológica y armada. El proceso dialéctico de consolidación nacional fue variando conforme a los escenarios políticos. El discurso político de aquellos años preservaba una impronta antiimperialista y a favor de las tradiciones latinoamericanas. No obstante, ni las tradiciones latinoamericanas, ni los intereses imperialistas

han podido ser definidos conceptualmente, más allá de los distintos discursos políticos que se esgrimían.

2. La vuelta a la democracia

Las Fuerzas Armadas se repartían culpas internamente por la derrota de la guerra de Malvinas. El silencioso consenso de la población hacia la lucha antisubversiva era cada vez menor y las consecuencias de la represión ilegal se tornaban más visibles. En septiembre de 1983, las fuerzas policiales del Estado anunciaban que no iban a actuar bajo ninguna coacción política e iban a desempeñar un rol institucional desligado de las demandas ideológicas. En consonancia, las Fuerzas Armadas prometieron no tomar el poder nunca más mediante golpes de Estado.

Las organizaciones de derechos humanos organizaban las "marchas por la vida" y, entre ellas, se destacaban las Madres de Plaza de Mayo. Al estar vigente el recuerdo de la dictadura militar, el repudio a cualquier tipo de violencia era claro. El clima en las calles era de efervescencia, las marchas y las movilizaciones pacíficas formaban parte del paisaje cotidiano. Los civiles comenzaron a tomar un rol más activo en la política, participando en protestas sindicales y en marchas partidarias. De todas maneras, una residual "mano de obra desocupada" siguió obrando dentro del negocio del secuestro durante algún tiempo. Se trataba de exintegrantes de grupos de tareas y fuerzas militares.

Existía una desacreditación del rol de las fuerzas represivas del Estado, puesto que habían sido usadas para la violación sistemática de las garantías constitucionales. Las autoridades dictatoriales habían asumido las facultades legislativas y estas abarcaron el acuerdo con el Senado para la designación de jueces. En 1969, la Corte Suprema de Justicia estableció que "un gobierno de facto ejerce las atribuciones

privativas de cada una de las Cámaras del Congreso". De esta forma, las dictaduras militares podían obrar bajo la complicidad del Poder Judicial. La exigencia de excluir a los jueces nombrados por la dictadura se sumaba al pedido de justicia. Los civiles reclamaban la división de poderes, la independencia absoluta del Poder Judicial y los organismos de derechos humanos le exigían al futuro gobierno la constitución de una comisión bicameral con la intención de investigar el terrorismo de Estado. Uno de los ejes del debate político gira en torno a la Ley de Pacificación Nacional (22924), también conocida como Ley de Amnistía, cuya resolución fue promulgada por la Junta Militar. Esta declaraba "extinguidas las acciones penales emergentes de los delitos con motivación o finalidad terrorista o subversiva". Esta ley tenía vigencia para los delitos políticos realizados entre el 25 de mayo de 1973 y el 17 de junio de 1982.

El proyecto electoral del justicialismo en 1983, presentado en el Congreso nacional, manifestaba: "Las fuerzas políticas se comprometerán en un amplio y duradero acuerdo, a sostener mancomunadamente el esfuerzo de reconstruir la democracia y desterrar toda forma de violencia entre los argentinos". Dicha violencia no había sido percibida de igual manera, cuando la burocracia sindical peronista impulsaba grupos parapoliciales hacia la persecución de activistas de izquierda, incluso hacia la lucha contra miembros dentro del mismo movimiento peronista.

Dentro de su propuesta electoral, el justicialismo promovía la derogación de toda legislación represiva y una reforma de la Constitución, incluyendo la sanción de una ley en defensa del orden constitucional, con la intencionalidad de tipificar claramente los delitos en contra del sistema democrático. El candidato presidencial era Ítalo Luder, presidente del Senado en 1974 y presidente provisional en 1975, y el candidato a vicepresidente, Deolindo Felipe Bittel.

El justicialismo aún contaba con algo de imagen positiva, debido a su proscripción durante los años de dictaduras militares y el significado

todavía vigente de la figura de Juan Domingo Perón. Sin embargo, en su núcleo interno, se desataba un caos debido a la ausencia de su líder. La imagen del partido en los meses previos a la dictadura iba a persistir hasta estos días. Por su parte, Luder iba a presentar un rechazo moderado hacia la Ley de Pacificación Nacional. Esto no era casual, ya que si bien una gran parte de los desaparecidos eran peronistas, dicha ley iba a generar que el propio partido tuviera que dar explicaciones por el accionar ilegal de la Triple A, generando desapariciones y asesinatos. Se especulaba con un "perdón" hacia las Fuerzas Armadas.

Frente a la disputa con Fernando de la Rúa, Alfonsín se lanzó a pelear el liderazgo de la Unión Cívica Radical, desde su movimiento, Renovación y Cambio. Desde su plataforma electoral, se planteaba consolidar las bases del poder democrático. En su propuesta oficial, sostenía: "Desde hace mucho tiempo no ha existido en la Argentina un movimiento mayoritario que contara con la capacidad para movilizar a las grandes mayorías nacionales y tuviera a la vez capacidad para ejecutar políticas económicas que permitieran la transformación permanente de nuestra sociedad". En su discurso, se mostraba más crítico hacia la unión que había existido entre los civiles y las fuerzas militares. Al contrario del discurso peronista, poseía una visión firme y contundente en cuanto a los derechos humanos y al pedido de justicia por las muertes y desapariciones. En concreto, la Unión Cívica Radical buscaba asociar la socialdemocracia con la justicia social y el pensamiento nacional–popular.

La alusión a la época en que solo dos presidentes habían podido terminar su mandato era clara, y se manifestaba meses antes de la elección de 1983, a través del dirigente radical Juan Carlos Pugliese: "Deben crearse las bases de un período prolongado de desarrollo con democracia, libertad y justicia, para lo cual es necesario una reforma profunda del país". Se refirió también a la reciente historia del país como un proceso decadente de 50 años. No fue simplemente la efervescencia

de la primavera alfonsinista, sino que se trató de un cambio de época y paradigma. La democracia se definía como la antítesis inexorable de la dictadura militar.

Alfonsín se logró imponer frente al candidato justicialista Luder con un 52% contra un 40%, el 30 de octubre de 1983 en una jornada histórica. El radicalismo triunfó en algo que se consideraba inalcanzable hacía décadas, derrotó al peronismo en elecciones abiertas y democráticas. Conformó un frente amplio en el cual eran incluidos sectores de izquierda y derecha, formando una coalición policlasicista. Volvimos entonces a la similitud con la percepción yrigoyenista del radicalismo y su bandera política, que incluso iba a lograr que votantes de la izquierda peronista comulgaran con el presidente electo.

En su asunción oficial, el 10 de diciembre de 1983, existía una suerte de exceso de optimismo. La aceptación y el prestigio que se le otorgaban a Alfonsín habían sido pocas veces vistos en nuestro país. La propuesta de la UCR consistía en enjuiciar a los militares responsables del Proceso y derogar la ley de autoamnistía. La dirigencia radical hacía hincapié en los valores cristianos de la democracia y en la asociación de la misma con la no violencia, la estabilidad institucional y la justicia social. Si bien la aceptación al juicio a las juntas crecía entre la opinión pública, los aparatos militares no iban a ceder fácil ante su juzgamiento y las cúpulas sindicales, de ideología peronista ortodoxa, iban a presentar una oposición tajante hacia el proyecto alfonsinista.

No se promovió necesariamente un plan de gobierno y una comparación de gestión en el bipartidismo argentino. El gobierno radical venció al peronismo debido principalmente a su posición ante el juicio a los militares y los derechos humanos. El contexto social y político se encontraba de forma unánime en oposición a las Juntas Militares. Por este motivo, la derogación de la Ley de Amnistía y el Juicio a las Juntas iban a darle la clara victoria a la fórmula Alfonsín–Martínez. Este mismo escenario se mantuvo a lo largo de la

historia en todas las elecciones, ya los contextos sociales determinan las políticas públicas.

El justicialismo se hallaba en una crisis de alternancia, ya que no había renovación de los cuadros políticos, y estos se hallaban bajo la sombra de la represión ilegal y el período predictatorial. La Juventud Peronista, en ese entonces, denunció la intervención de la dictadura militar en la reorganización del Partido Justicialista. Este se encontraba intervenido por autoridades policiales de la provincia de Buenos Aires, que, según el comunicado oficial de la JP, impidieron las elecciones democráticas de las autoridades partidarias en el congreso provincial de su propio partido. Es decir que, ante la demanda de época, el justicialismo se vio obligado a dar un giro discursivo y plantear lo opuesto a lo establecido hacía siete años. La Ley de Pacificación Nacional no iba a ser más que la ilustre demostración de la paulatina entrega de la represión ilegal de las instituciones justicialistas hacia las Fuerzas Armadas.

El Poder Ejecutivo creó por decreto la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) el 15 de diciembre de 1983, presidida por Ernesto Sabato e integrada por intelectuales y activistas de derechos humanos. Este organismo se encargó de recolectar testimonios de familiares de desaparecidos y de sobrevivientes del Proceso hasta 1984, y formó parte de una enorme prueba para el juzgamiento de los militares. De todos modos, en distintas cámaras del país que aún eran integradas por jueces cómplices de la dictadura militar, las causas no avanzaban. El gobierno se esforzaba en excluir jueces del Proceso en la Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires y en la Corte Suprema. De todas formas, no fue suficiente. Parte de la jerarquía eclesiástica, los sectores más conservadores del peronismo, junto con algunos sindicatos ortodoxos, iban a calificar estos juicios como una victoria de la subversión mediante otros métodos. La capacidad de acción por parte de este organismo iba a ser limita-

da, ya que se les iba a negar inspecciones a centros clandestinos, o si el ingreso no era negado, lo lograban bajo amenaza y agravios. Desde el gobierno radical, se castigaba el accionar no solamente de las Fuerzas Armadas, sino también de los movimientos guerrilleros. Sin embargo, se le adjudicó la llamada teoría de los dos demonios que hizo mención de la paridad de los bandos enfrentados. El escritor y presidente de la Conadep, Ernesto Sabato, se encargó de establecer la diferencia entre los atentados guerrilleros y el terrorismo de Estado.

"Se nos ha acusado, en fin, de denunciar solo una parte de los hechos sangrientos que sufrió nuestra nación en los últimos tiempos, silenciando los que cometió el terrorismo que precedió a marzo de 1976, y hasta, de alguna manera, hacer de ellos una tortuosa exaltación. Por el contrario, nuestra Comisión ha repudiado siempre aquel terror, y lo repetimos una vez más en estas mismas páginas" (Prólogo; *Nunca más*).

El contexto internacional de Guerra Fría seguía teniendo incidencia en el plano nacional. El gobierno radical estaba cerca de ser tildado como populista, prosoviético y con una tendencia izquierdista. Diversos redactores de prensa gráfica se referían a una transición de la socialdemocracia hacia el socialismo. El relato de la esclavitud comunista seguía aún vigente y era utilizado por los sectores más ortodoxos para desacreditar al gobierno. Se hablaba de una demagogia populista que desestabilizaba la democracia republicana.

El presidente de la nación mostraba su recepción hacia Alan García, presidente peruano electo en junio de 1985. García formaba parte del APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana), movimiento fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre. La alianza de dicho movimiento fue armada en 1924, en el Perú, siguió la misma dialéctica del marxismo, pero se logró diferenciar del comunismo europeo. Se trataba de generar un "socialismo latinoamericanista" preparado para las exigencias propias de la región. En sus comienzos, levantó los reclamos del ingreso a las universidades de forma equitativa y la abolición

del latifundio. Se caracterizó como un "marxismo no comunista" y fue el comienzo de las izquierdas latinoamericanistas. Dichas izquierdas iban a tomar más relevancia a partir de fines de los 90, con la disolución formal de la Unión Soviética.

En el plano económico, la etapa era muy compleja. Alfonsín hablaba de una "economía de guerra" y la herencia de la dictadura militar complicaba aún más el panorama social. El proceso militar había producido un aumento de la pobreza, incremento en la desocupación, un desequilibrio fiscal del 10% y la estatización de la deuda externa privada en 1982. La reforma de Martínez de Hoz privilegiando al sector financiero en 1977 iba a crear un poder económico con capacidades desestabilizadoras. Durante el primer año y medio de gobierno, según el Indec, el precio de los alimentos aumentó un 2604%, el costo de la educación un 3412% y el nivel general de precios al consumidor creció un 2769%. El gasto público y la emisión monetaria se mantuvieron en constante aumento desde fines de la dictadura militar hasta el primer gobierno democrático.

En búsqueda de un atenuante, el gobierno implementó por decreto el Plan Austral, con la finalidad de controlar la inflación. La reforma económica iba a implementar la moneda "austral" estableciendo uno cada 1000 pesos. El peso argentino iba a devaluarse un 29% en relación con la nueva moneda. Se produjo un congelamiento de precios, salarios y tarifas y la inflación se pudo contener sin frenar el crecimiento económico. Esta reforma, implementada por el ministro de Economía Juan Vital Sourrouille, iba a ser mal vista por la oposición debido a su sanción por decreto.

El caos económico iba a ser parte de la cotidianeidad y el discurso alfonsinista del 30 de octubre de 1983 "con la democracia se come, se cura y se educa" iba a ser severamente criticado. El objetivo de consolidar las bases democráticas iba a ser difícil de lograr. De hecho, la noción misma de democracia podía ser puesta en duda en este período.

Habiéndose denunciado el Pacto militar–sindical en mayo de 1983, en la que se evidenciaba la complicidad de 62 organizaciones sindicales con las Fuerzas Armadas durante la dictadura, el Poder Ejecutivo iba a mantener una tensa relación con el sindicalismo. De la misma manera, la ley Mucci, impulsada desde el Ejecutivo como una reforma sindical, resultaba ser un agravante. El justicialismo sindical la entendió como un intento de desorganizar a los gremios. No obstante, dicho proyecto de ley tenía la necesidad política de desconcentrar el poder sindical y diluir la hegemonía peronista. Esto consistía en limitar la posibilidad de la reelección de cargos electivos, la representación de las minorías y la democratización institucional.

El breve éxito del Plan Austral y el Juicio a las Juntas en 1985 hicieron que el radicalismo nuevamente derrotara al peronismo en las urnas ese mismo año. La victoria no fue únicamente un mérito del radicalismo, sino que la división del peronismo lo benefició. La continuación del relato alfonsinista tuvo lugar en el juzgamiento de los principales responsables de la dictadura militar, Agosti, Videla y Massera. Más allá de las ineficaces medidas económicas, el relato que promovía a los derechos humanos lograba sosegar a la sociedad. Los tres comandantes militares fueron sentenciados a reclusión perpetua, con el agregado del artículo 52 del Código Penal, que planteó la pena accesoria de reclusión por tiempo indeterminado. La pena de reclusión perpetua fue sentenciada de igual manera para el general Viola y el almirante Armando Lambruschini. El general Leopoldo Fortunato Galtieri fue sentenciado a 15 años de prisión.

En paralelo, Alfonsín anunció la creación de un Consejo para la Democracia, integrado por figuras de la política, la cultura y la ciencia, con la intención de generar un plan que conjugara las coincidencias de diversos sectores del país. Más que como un acuerdo político, el plan buscaba reafirmarse como un proyecto integral de sociedad. Dicho consejo se creó como sustento al anteriormente sancionado Pacto De-

mocrático. Este último se basaba, dicho por el presidente, en "la participación, la modernización y la ética de la solidaridad". Tenía como finalidad la participación colectiva y activa de toda la sociedad junto con la consolidación del sistema representativo. También se destacó el rol del Parlamento, identificándolo como el principal sitio del debate político y el intercambio de ideas. El pueblo argentino podía tener sus quejas hacia el rol del Parlamento, o a su ocasional ineficacia, pero contar con el debate político era mejor que su carencia.

La justicia social y la estabilidad social eran reafirmadas mediante estos hechos, demostrando que el gobierno podía resolver conflictos por la vía institucional. El rechazo a cualquier tipo de violencia hacía que Alfonsín aumentara su imagen pública. Los atentados sobre los locales radicales, o incluso las amenazas hacia el propio presidente, convencían a la opinión pública de que estos juicios eran necesarios. Podemos sostener que el Juicio a las Juntas y el Pacto Democrático tenían como objetivo consolidar las bases de la democracia en analogía con el radicalismo. Es decir, identificar a los derechos humanos con el radicalismo y a Raúl Alfonsín como el "padre de la democracia". Entre tanto, el gobierno iba a ratificar su intención de no declarar una ley de amnistía.

El peronismo, entre tanto, iba a seguir fragmentado. Para junio de 1985, las discrepancias iban a provocar rupturas en el Senado de la nación, conformando tres nuevos bloques, debido a las supuestas desviaciones ideológicas. Había acusaciones internas por haber mantenido conexiones con autoridades del proceso militar. Estas rupturas beneficiaban directamente al oficialismo. Por otra parte, el análisis que merece este contexto, y va a ser prudente también en los siguientes, es el del peronismo en la oposición. Ya que el poder excede únicamente el aparato estatal y posee la capacidad de movilizar y cesar las actividades por cualquier motivo que se crea prudente. Otra vez volvemos a la problematización dentro del concepto de democracia. La sociedad

hizo uso de su mínima participación en la política mediante el voto. Pero en los siguientes años, el gobierno y el poder legislativo electo no necesariamente tuvieron el poder imprescindible para gobernar. En las organizaciones sindicales, las elecciones fraudulentas y las listas únicas fueron, en algunas ocasiones, moneda corriente. Dichas organizaciones no asumieron por el voto popular. Por lo tanto, se generó una problemática inexorable e inherente al sistema democrático moderno.

Los sociólogos Emilio de Ípola y Juan Carlos Portantiero impulsaron a Alfonsín para que asociara a la UCR con la Internacional Socialista. A su vez, redactaron el discurso del Parque Norte, leído por el Presidente el 1 de diciembre de 1985. La impronta izquierdista dentro del radicalismo se asociaba cada vez más con el discurso de Alfonsín. El oficialismo insistía con una modernización del Estado y de los servicios públicos. Dentro del marco discursivo, también se anunciaron la reforma del a Constitución, la apertura a inversiones extranjeras y el traslado de la capital a Viedma. En el ámbito familiar, se propusieron las leyes de divorcio y patria potestad compartida. Las últimas dos leyes fueron las únicas en poder ser aprobadas. Las tensiones, los conflictos económicos y las huelgas siguieron siendo parte del panorama cotidiano. A partir del discurso del Parque Norte, no hubo otro respiro para el gobierno. Mientras la inflación superaba un 100% anual y el contexto económico empeoraba, Alfonsín hizo hincapié en seguir con los Juicios a las Juntas. Su discurso inicial aún seguía siendo capaz de consensuar a las mayorías. La Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires se centró en las causas de la ESMA y el Primer Cuerpo del Ejército. No obstante, las causas demoraban más de lo previsto.

Para diciembre de 1986, la figura política de Alfonsín comenzaba a desgastarse. Entiendo la presentación de la ley de Punto Final por parte del Ejecutivo, y a su posterior sanción en ambas cámaras, como el comienzo del fin del relato alfonsinista. El proyecto de ley de Punto

Final extinguía de causas a los militares incursos en violaciones a los derechos humanos, que no hubieran sido citados a declarar dos meses después de la sanción del proyecto. Sin embargo, en ese lapso, jueces de todo el país abrieron cuatrocientas cincuenta causas nuevas a militares culpados por terrorismo de Estado. La Convención Radical, antes de la sanción de la ley, sostuvo de forma unánime que era necesario emprender la reconciliación entre los argentinos. Héctor Ríos Ereñú, titular del Ejército, se refirió al proyecto de ley como una imagen pragmática de un cambio de país y el inicio de una profunda reconciliación. Pese a que este proyecto marcaba una gran parte del fin del discurso, se quería aprehenderlo dentro de este. Es decir, esta ley iba a ayudar a la convivencia pacífica, a reivindicar los valores de la democracia y la justicia social. Incluso las manifestaciones populares en contra del Punto Final eran puestas en ese marco, y se hacía hincapié en la posibilidad del disenso en democracia. De todos modos, la continuidad del relato no iba a ser posible. El contexto social era caótico, y el oficialismo veía a esta sanción únicamente como un atenuante y una posible mejora en el orden social. La continuación de los juicios por tiempo indeterminado traía un clima de inestabilidad. Raúl Alfonsín lo expresó de esta forma:

"Tuve que elegir entre defender los derechos humanos para atrás, olvidarme de los derechos humanos para adelante o tomar el toro por las astas y realizar una ley con todo el desagrado. Se iba a producir un golpe de Estado, se desgranaba el poder y se percibía en todas las fuerzas una actitud de esa naturaleza".

No bastó mucho tiempo para que las Organizaciones de Derechos Humanos, partidos políticos opositores, sindicatos y gran parte de la sociedad repudiaran estos actos. Se organizó una marcha en diciembre de 1986 en repudio de esta ley, a la cual asistieron entre 55.000 y 80.000 personas. El Movimiento al Socialismo (MAS), la Juventud Radical y las Abuelas de Plaza de Mayo eran las columnas centrales,

al grito de "el pueblo unido jamás será vencido". El principal foco de reclamo era el Poder Judicial, la complicidad y la demora en las causas de lesa humanidad. La ley trajo conflictos internos dentro del mismo radicalismo. La Juventud Radical expresó su rechazo a este proyecto y, de la misma forma, criticó a la dirigencia por él. Los jóvenes fueron tildados de provocar "escaramuzas temperamentales" y señalados como una "barra" que querían privar al radicalismo del debate. Activistas de derechos humanos irrumpieron en el tratamiento del Punto Final en la Cámara de Diputados agrediendo a los legisladores. De todos modos, las movilizaciones populares no lograron frenar la sanción del proyecto.

El proyecto político alfonsinista había concluido en su antítesis. Pero, según el gobierno, era la única forma de lograr la integración nacional. Era visible que las Fuerzas Armadas seguían teniendo incidencia en la política nacional y forzaron al gobierno a un acuerdo "pacífico". Las políticas de derechos humanos no pudieron llevarse a cabo debido a la imposibilidad de un pleno ejercicio de la acción democrática. Los Juicios a las Juntas eran el atenuante al fallido Plan Austral y a las erradas políticas económicas. Desde los sectores más conservadores, la creación de la Conadep y los enjuiciamientos a los militares eran vistos como un triunfo más del marxismo internacional y la guerrilla revolucionaria. Sin embargo, pese a que el costo político era muy alto, el oficialismo calificaba a su proyecto como una transición. Se hablaba de los tres años de gobierno tomando en cuenta la eficacia de las instituciones, la libertad de expresión y de prensa, la normalización de los sindicatos, el diálogo y el resurgimiento de la cultura de la nación. La dirigencia del justicialismo se dividía entre los que se oponían a enjuiciar a integrantes del ejército y a jefes montoneros y los que, desde una postura más tendenciosa, buscaban una "amnistía a medias". No obstante, el costo político recaía directamente sobre el oficialismo.

El gobierno desarticuló definitivamente su discurso con la ley de Obediencia Debida n.º 23521, dictada el 4 de junio de 1987. Antes de

la sanción de esta ley, el levantamiento carapintada[16] encabezado por el coronel Aldo Rico en Campo de Mayo fue otro atentado en contra de la democracia que argumentaba la ilegitimidad en los juzgamientos a los oficiales que habían cumplido órdenes. Los rebeldes, con un gran rechazo por parte de la ciudadanía, exigieron el reconocimiento personal de Alfonsín para rendirse. El gobierno buscaba apaciguar la situación, por el temor a que la violencia desatada produjera más muertes. La victoria de la democracia estaba en juego. Alfonsín intentó buscar una solución pacífica, creyendo que esta iba a ayudar a la consolidación democrática, como lo había planteado durante su gobierno. Rico quedó detenido y brindó una conferencia de prensa en la cual se autoidentificaba como un vencedor. Se autoadjudicaba el hecho de haber conciliado a las Fuerzas Armadas con el pueblo. Entre tanto, el nuevo jefe del Estado Mayor, José Segundo Dante Caridi, manifestó su pedido de apoyo el ejército por haber ganado la lucha en contra de la subversión.

La obediencia debida no era más que una justificación ilegítima para los oficiales que solamente habían cumplido órdenes. La aceptación de este tipo de razonamiento fue concretamente la renuncia a todo pensamiento crítico. Plantear que los oficiales podrían ser exculpados por el mero hecho de haber obedecido órdenes hace pensar que eran sujetos sin una razón elemental. El motivo de esta ley fue el intento de continuar consolidando la democracia. En ese entonces, toda la praxis política era llevada a cabo en nombre de la democracia y su beneficio. El recuerdo de la dictadura aún estaba vigente, y esto causó que, en la Semana Santa de 1987, existiera una gran manifestación popular en repudio a los levantamientos "carapintada". De todas maneras, las Fuerzas Armadas seguían con un rol paralelo activo.

La toma del regimiento de La Tablada por parte del Movimiento Todos por la Patria en enero de 1989, con el argumento de frenar un

16 Organización militar de derecha disconforme con la cúpula mayor de las Fuerzas Armadas.

golpe de Estado a partir de una supuesta conspiración militar, había instalado una sensación golpista en la sociedad. Los dirigentes a cargo fueron Enrique Gorriarán Merlo, exintegrante del ERP y Rubén Dri, filósofo y teólogo integrante del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. Alfonsín estuvo obligado a reforzar el rol de las Fuerzas Armadas con la creación del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), que habilitaba a los militares a participar en la represión interna, contradiciendo a la ley de Defensa Nacional sancionada en 1988. Se realizó una marcha a Plaza de Mayo a favor de la democracia. El gobierno dispuso de las Fuerzas Armadas y el enfrentamiento terminó con la vida de 33 militantes, 7 integrantes del ejército y 2 policías. El MTP era una organización guerrillera, encabezada por exmiembros del ERP y el PRT. Este iba a ser el último ataque guerrillero en la historia del país.

La sanción de la ley de Obediencia Debida, el malestar económico y los levantamientos militares disminuían la popularidad del radicalismo y fortalecían al justicialismo. La simpatía y el buen recibimiento hacia Alfonsín en su asunción habían sido opacados por el malestar social y su popularidad había descendido en el plano nacional e internacional. En las elecciones de 1987, la UCR obtuvo un 37% de los votos contra un 41% del justicialismo. El oficialismo había perdido todas las gobernaciones, a excepción de Córdoba y Río Negro. Pese a su derrota, el radicalismo obtuvo una buena elección, si se tiene en cuenta el caos social y económico que existía en ese entonces.

En el discurso de Alfonsín, las urnas no significaban una división, sino una unión de los argentinos ante la posibilidad de elegir su dirigencia. Antes de la victoria del justicialismo, hacía hincapié en la bondad de las elecciones y se refería a un "pasado no resuelto". Parte de la opinión pública sostenía que el presidente radical se había enamorado de su propio discurso y había disociado la praxis del relato. Es decir, su primorosa e innegable capacidad de oratoria lo había puesto

en ese balcón presidencial, pronunciando palabras que harían llorar a una nación entera. Sin embargo, pareció nunca haber dejado ese lugar. Las denuncias de un complot en su contra eran desestimadas aunque, años después, iba a comprobarse que el rol de la oposición no había sido del todo acertado.

Las elecciones por adelantado eran ya previstas, y Menem decía públicamente que se iba a consagrar como ganador. La crisis económica, la escalada del precio del dólar y la inflación récord no hacían más que favorecer a la oposición.

En las posteriores elecciones de 1989, el radicalismo cayó ante el peronismo nuevamente, con un 37% frente a un 41%. Durante junio, donde se habían producido 14 muertos en el marco de los saqueos y los enfrentamientos con la policía y comerciantes, Raúl Alfonsín junto a su vicepresidente Víctor Martínez presentaron su renuncia ante el Congreso. El 8 de julio se hizo el traspaso oficial de mandato. El bloque oficialista hizo una autocrítica y sostuvo que su verdadera victoria era la elección de candidatos por parte del pueblo, de forma limpia y transparente, haciendo alusión a la Ley Sáenz Peña y a los levantamientos populares de principios del siglo XX.

Cabe destacar un comunicado del Partido Socialista ante el triunfo de Carlos Saúl Menem (PJ):

"Es el retorno de una histórica voluntad de cambio nacional, popular y latinoamericana, dispuesta a enfrentar la crisis con verdadera decisión a partir de la convivencia, paz y solidaridad de los sectores sociales comprometidos en el esfuerzo común para la reconstrucción, la independencia económica y la justicia social".

Más allá de que el gobierno justicialista de Menem no iba a basarse en una matriz nacional–popular, tenía en su discurso un pasado favorable. El peronismo, más que un partido político en concreto, era un movimiento en el cual su mero acceso al poder iba a terminar con todos los males y las injusticias de la sociedad. Se proponía terminar

con los sectores antipueblo o antipatria. Estos eran la oligarquía argentina, la Sociedad Rural, el sector exportador agropecuario, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los EE. UU., entre otros. Estas ideas aprehendían al sector favorable al menemismo, y en contraposición, se formaba un rechazo a dicho sector recordando el perverso sistema educativo, las ideas populistas y el sindicalismo ortodoxo. El peronismo concluía en un significante en disputa constante. Sin embargo, los "indecisos", o los votantes no ideologizados, siempre apostaron a una vida amena al margen de la confrontación política, y reclamaron la unión de los argentinos. En el ámbito electoral, componían el factor decisivo y son los receptores de las campañas políticas, debido a que los votantes "ideologizados" o con afiliación partidaria ya tienen definido su voto antes de cada instancia electoral.

El comunicado del Partido Socialista dejó en evidencia el vacío en las instituciones partidarias argentinas, no solo porque respaldó un proyecto político que no se iba a cumplir, sino que apoyó a un presidente que hizo todo lo contrario a lo que dijo en campaña. Volvemos al absurdo de la política moderna, que se basa en la toma del poder por el solo hecho de tomarlo. Una realidad inmaterial e intangible.

En la confrontación publicitaria y electoral, existía una descalificación constante. Menem fue tildado de "fascista" por parte del candidato radical Angeloz y, lejos de proponerse nuevas ideas, se generaba un clima de hostigamiento y antagonismos. El candidato radical cargaba con todos los desaciertos de su propio gobierno, lo cual hacía casi imposible su victoria. La Unión Cívica Radical sabía que la victoria del justicialismo era inevitable. Sin embargo, el movimiento peronista venía de la crisis partidaria generada por la derrota electoral de 1983 y no iba a encontrar su verdadera matriz en los próximos años. Las medidas neoliberales de Carlos Saúl Menem iban a expresar a un "neoperonismo de derecha" que nada tenía que ver con las medidas de gobierno implementadas por Juan Domingo Perón.

¿Se puede hablar de un peronismo intrínseco, con una ideología inmóvil y convicciones concretas? La respuesta claramente es no. Si sostenemos que los contextos determinan las políticas públicas, preguntarse por una ideología de base, inherente a un partido político determinado, sería un absurdo. Sin embargo, ¿quién determina quién es peronista? El surgimiento de la sociedad de masas, y la posterior transformación a una sociedad industrial en 1946 dio paso a un estilo de política que iba a ser la base del peronismo. Por otro lado, al ser un movimiento político sin ideas concretas y excluyentes, el solo hecho de autoproclamarse peronista convierte a un sujeto en uno. Puede ser que se remita únicamente a una cuestión terminológica o semántica, pero lo cierto es que dicha lingüística es un seguro acceso al poder. Señalar a Menem como un subalterno de la política peronista no es nada menos que una aberración, ya que la dirigencia justicialista y el sindicalismo estuvieron detrás de él, sosteniendo su aparato político mediante las instituciones partidarias. ¿Cuál puede ser la reconstrucción pragmática de esas ideas en 1989?

La principal consigna del relato de Alfonsín había quedado excluida. No le quedó otra opción que ceder ante las presiones del ejército y el sindicalismo. La vuelta a las elecciones en 1983 no necesariamente dispuso de una vuelta a la democracia. El cambio de paradigma que planteaba en la introducción de este trabajo se basó en la consolidación de un sistema electoral que no iba a tener interrupciones por más de 30 años. Sin embargo, las presiones y la violencia política iban a seguir estando presentes en las calles.

En el plano internacional, el impacto a nivel mundial de la caída del Muro de Berlín en 1989 iba a hacer que la gente depositara su fe en el mercado y viera a la globalización inherente al progreso social. El socialismo como modelo económico había demostrado su ineficacia y las izquierdas iban a estar forzadas a reorganizarse y, en algunos casos, reinventarse. Podemos decir, haciendo un análisis del plano interna-

cional, que la sociedad de consumo derribó a cualquier tipo de relato político de izquierda.

En la posterior presidencia de Carlos Saúl Menem, la confrontación entre las Fuerzas Armadas y las guerrillas iba a llegar a su fin.

3. Menemismo y peronismo

Parte de la prensa internacional veía con malos ojos el nuevo ascenso de un gobierno peronista en la Argentina. Fue precisamente el caso de España, donde los medios nacionales manifestaban el descontento de la población sobre el peronismo, debido a sus contactos estrechos con el franquismo. De la misma forma, los vínculos que algunos analistas establecieron entre el peronismo y el fascismo italiano tuvieron un sustento, incluso, admitidos por el propio Perón.

El régimen peronista había optado durante sus primeros años por implantar la censura a través del ahogo financiero a los medios de comunicación, efectuar la ocupación o la compra de las principales emisoras radiales y la prensa independiente, hasta la persecución y encarcelación de periodistas y editores opositores. Juan Domingo Perón confiaba en la Policía Federal como su principal fuerza de seguridad. Mediante este organismo, se efectuaba la persecución a sindicalistas, políticos y estudiantes opositores.

Indagando más allá de la matriz política que presentó el peronismo y remitiéndonos a un mero análisis social, la historia nos ha demostrado que el proletariado industrial no representó de forma intrínseca y orgánica la libertad social e igualdad. Sin embargo, hubo una tendencia político–discursiva a identificar a la clase obrera como progreso social.

El sociólogo y politólogo estadounidense, Seymour Martin Lipset, sostenía mediante estudios sociales de la opinión pública, religión, estructuras familiares y personales, que las clases sociales bajas eran

más propensas a generar individuos más rígidos e intolerantes. Esto se debía a que, debido a sus malas situaciones, intentaban buscar una solución más rápida y accesible a las problemáticas sociales. Por consiguiente, los movimientos autoritarios poseían más capacidad de aceptación en los estratos bajos de la sociedad. No existían procesos sociales capaces de generar un régimen autoritario, sino que este se generaba por una aceptación por los individuos con actitudes determinadas. Sin embargo, para el sociólogo norteamericano, las clases bajas no eran autoritarias por naturaleza, simplemente elegían la alternativa menos compleja. Este argumento es, igualmente, unilateral, ya que el autoritarismo puede surgir de cualquier clase social. Los discursos radicalizados han emergido desde esferas políticas de derecha y de izquierda.

La democracia plantea un problema estructural. La derrota de las minorías frente a las mayorías no democráticas. Por otro lado, la mera aceptación de un proyecto o plan por parte de las mayorías no lo convierte en válido. Es acertado problematizar la noción de democracia en la cultura moderna, ya que el concepto remite principalmente a las elecciones. El voto popular, en consecuencia, es una mínima participación en la esfera política. Sostengo que la mayor cuota de poder que se le puede dar a un gobierno o partido es el apoyo por parte de la sociedad de masas.

El cierre del principal medio opositor, *La Prensa*, en el primer mandato peronista fue justificado adjudicándole al mencionado periódico un accionar acorde a intereses imperialistas. Sin embargo, estos hechos eran justificados sosteniendo que los periodistas eran más "espías" que difusores de información y que los medios de comunicación eran empresas que respondían a intereses económicos. Para Perón, el imperialismo norteamericano hacía uso de principios de validez universal como la libertad de prensa y la libertad de información para imponer sus doctrinas. Al margen de la crítica que se le podía hacer a los dos conceptos mencionados anteriormente, estos nunca podían ser supri-

midos por parte del Estado. La propaganda de la doctrina peronista, "Mi mamá me mima, Evita me ama", daba cuenta de un comienzo paulatino de totalitarismo. Si bien las elecciones se mantenían vigentes, la libertad de expresión no lo hacía.

Un cambio de paradigma, de gran influencia en la posterior doctrina peronista, se dio en el Congreso Sindical Constituyente del 1 de mayo de 1936, durante la presidencia del militar Agustín Justo. Con la mayoritaria influencia del socialismo, la CGT se orientó estratégicamente hacia el Estado, buscando una forma más directa de intervenir en los gobiernos y en la sociedad en su conjunto. La central obrera llamó a participar a los sectores populares sin representación política, a los partidos socialistas, radicales, comunistas, al partido demócrata progresista y a los movimientos estudiantiles. Se formó un acto con una amplia participación popular. Este suceso va a marcar el rol del sindicalismo en los posteriores años y la principal base política del peronismo.

Situándonos en el peronismo de la década de los 90, en la derrota de Angeloz y la asunción de Carlos Saúl Menem, la CGT había podido mantener la unidad en el movimiento obrero junto con su carácter homólogo y orgánico. En la central sindical coexistían tres tendencias: el sindicalismo pragmático de negociación, el sindicalismo confrontativo peronista ortodoxo y el sindicalismo peronista de perfil socialcristiano. Sin embargo, luego de su asunción, Menem apartó a los sindicatos de su poder correspondido anteriormente, para realizar reformas económicas y laborales. Estas tuvieron un gran impacto negativo en la clase trabajadora. El presidente electo había implementado un plan económico neoliberal, desarrollando de esta forma la antítesis del justicialismo. Hubo, no obstante, un sector del sindicalismo peronista que convergió con la política económica menemista y se le fue asignado el control de las obras sociales. Por otra parte, el sindicalismo peronista ortodoxo luchaba por volver a su anterior rol privilegiado y centrarse una vez más en el interior del gobierno. El sindicalismo socialcristiano tomó una posición

hostil al neoliberalismo y siguió con su pensamiento latinoamericanista, planteando la propuesta de una economía de propiedad mixta.

El mandatario electo cambió su plan económico de campaña y optó por uno similar al de los países de la región y los que a su vez estaban abandonando el comunismo en Europa del Este. En la lista de las principales empresas para privatizar se encontraban la Junta Nacional de Granos, el Instituto Nacional de Reaseguros (INR) y la Administración General de Puertos. Debido al malestar económico y la situación crítica, el entonces ministro de Economía Rapanelli selló un acuerdo con el FMI. Se buscaba una reforma estructural del Estado y una reducción del déficit. Entre 1981 y 1990, el producto bruto interno per cápita disminuyó a un promedio de 2,1% anual. La situación económica heredada era crítica.

El candidato radical Angeloz tenía un discurso opuesto al del candidato peronista. Planteaba la privatización de las empresas nacionales, la reducción del intervencionismo económico y la desregulación de la economía. De manera paradójica, esto fue lo que terminó haciendo el mandatario electo Carlos Saúl Menem. Estas políticas no eran nada más que el "inconsciente colectivo" del momento, ya que las empresas estatales tenían un mal funcionamiento. Por otro lado, el radicalismo había sido forzado a entregar el mandato y adelantar las elecciones, y la incapacidad de gestionar de la UCR era visible.

El presidente electo se reunió con empresarios, economistas liberales, integrantes de la jerarquía eclesiástica y sindicalistas con afinidad a su gobierno. En el plano económico, el mercado era identificado como el garante para regular la economía y el Estado era asociado con la inmovilidad y el no progreso. Menem hablaba de una "revolución productiva" y un "salariazo". El ministro de Economía Miguel Ángel Rapanelli, directivo del grupo económico Bunge y Born (señalado por el propio Perón como un grupo de "vendepatrias"), planteaba la idea de "terminar con subsidios y privilegios de todo tipo que pagamos todos en beneficio de

unos pocos". Es decir, lo opuesto a la génesis del peronismo tradicional, de plantear un esquema de estatización de los principales bienes y servicios y realizar un aumento en el gasto público para la distribución de la riqueza. En el plano socioeconómico, se ponía a las multinacionales y a los empresarios como un modelo para seguir, un ejemplo de vida. La concepción individualista del mundo estaba más vigente que en los años anteriores y hasta la propia clase media se autoadjudicaba sus errores. La paulatina desaparición de una gran parte de la clase media y el consecuente crecimiento de las clases bajas era algo lógico, ya que según el propio presidente, "pobres hubo siempre".

Las declaraciones del ministro de Economía no únicamente eran creencias sin sustento o comprobación empírica, sino que eran perjudiciales para la sociedad en su conjunto. Reducir el gasto público y privatizar empresas devenía en la desacreditación no solo de la institucionalidad estatal, sino también de los empleados públicos. Todas las clases sociales, incluso las más bajas que eran las que más sufrían las políticas neoliberales, afirmaban al unísono que los empleados públicos eran parte de esta gran problemática. Por lo tanto, hacía falta un recorte de presupuesto para los empleados, e incluso, una legislación que permitiera quitarles sus beneficios.

Otra vez, se especulaba con un indulto a los militares responsables del Proceso y, definitivamente, la intención de Menem era exculpar a los miembros de la Junta Militar. Apenas se conocieron las posibles medidas, organismos de derechos humanos, partidos políticos de izquierda e, incluso, fracciones del propio Partido Justicialista, marcharon en contra del indulto. La medida era justificada por el presidente con la idea de una pacificación. Las políticas de derechos humanos adoptadas por el gobierno peronista coincidían con las empleadas en los últimos años de gobierno alfonsinista. Como medida de resistencia, se organizaron las marchas "contra el indulto y el olvido", encabezadas por las Abuelas de Plaza de Mayo.

La cúpula del justicialismo se reunió, en el comienzo de su gobierno, para debatir las medidas por emplear para combatir la crisis económica. Dentro de la reunión, se trató el financiamiento de las provincias y diversas maneras de dirimir las consecuencias sociales de la crisis. Antonio Cafiero, el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, hizo hincapié en la figura de Eva Perón y su afinidad por los que menos tienen. Sin embargo, en el marco del mismo encuentro, Cafiero requirió a los miembros de la mesa de conducción que restringieran al máximo sus gastos. Entre las medidas propuestas por el gobernador, se enfatizó incentivar la producción y el aumento de los salarios. Por otra parte, se planteaba un aumento de impuestos sobre la producción de azúcar y tabaco para aumentar los ingresos a las provincias. Todas estas medidas estaban enunciadas bajo el sello histórico del justicialismo, la "justicia social".

Sin embargo, en 1989, el gobierno envió al Congreso el proyecto de Ley de Reforma del Estado. Esta otorgaba las facultades al Poder Ejecutivo para liquidar, fusionar o privatizar empresas públicas. El peronismo mantenía un molesto y prudente silencio ante el mencionado proyecto, conociendo que era ir en contra de sus propias convicciones. El radicalismo, entre tanto, apoyaba las privatizaciones de empresas como Aerolíneas Argentinas y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel). La diferencia entre ambos partidos era que la UCR sostenía la necesidad de que las privatizaciones fueran consensuadas por el Congreso y no decretadas por el Poder Ejecutivo. Una de las principales privatizaciones, y de mayor impacto, fue la de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) el 31 de diciembre de 1990 mediante el decreto n. 2778. La excusa era la misma que se daba en todos los procesos de esta índole. La privatización ayudaría, según el Poder Ejecutivo, a efectivizar la producción, y por lo tanto, el producto final costaría menos. En consonancia, el Senado y la Cámara de Diputados sancionaron la Ley de Emergencia Económica, que ayudaba a proceder con

las privatizaciones y suspendía subsidios, subvenciones, regímenes de promoción y el despido de empleados estatales. La cúpula de la CGT, ante estas leyes, mostraba un silencioso consenso.

Dichas reformas le otorgaban facultades al Poder Ejecutivo a privatizar empresas estatales, renegociar la deuda externa y suspender derechos laborales. A partir de estas leyes, el presidente de la nación iba a gobernar mediante decretos, sumando más de 400 en los años posteriores. De manera eficaz, el concepto de democracia fue aislado de forma contundente con el amparo de los recursos legales necesarios. La democracia no planteaba únicamente sus falencias sustanciales, sino que paradójicamente podía ser corrompida mediante los mismos poderes del Estado.

El peronismo, como expresión política, pasaba en esta etapa uno de sus peores momentos. Sin embargo, dentro de él, se hacía una leve referencia "a mirar al futuro y no al pasado". Desde esta postura, el justicialismo en su cúpula planteaba que su principal objetivo era la justicia social, y esa era la única doctrina que se debía recordar. Los contextos habían cambiado mucho como para volver a ese "viejo estatismo" planteado en la década del 40. Se hablaba, entonces, de una adaptación del modelo peronista a un nuevo capitalismo emergente. Lo que en un análisis pormenorizado se debería haber enunciado es la adaptación del peronismo hacia un liberalismo.

Todo discurso político posee un pasado en el cual se basa para justificar sus acciones. En el caso de Menem, él argumentaba que había una decadencia paulatina, iniciada en la crisis mundial de 1930. Sin embargo, esto no se debía a las malas políticas económicas de los gobiernos antipopulares de la década del 30, a las dictaduras militares o a la inestabilidad política, sino que se basaba en el intervencionismo estatal y la excesiva regulación de la economía. El peronismo, como movimiento político dialéctico e inconcluso, había permitido a Menem hacer su propia interpretación y permitir autoproclamarse peronista. El presidente

hacía hincapié en las políticas del segundo mandato de Perón (1951–1955) basadas en el aumento de las inversiones extranjeras. El hecho de que la Argentina fuera una potencia mundial a principios del siglo XX y que haya perdido de a poco esa posición se debía, según Menem, a un intervencionismo estatal forzado y a un abandono del mercado.

Así como todo discurso posee un pasado concreto, también posee un futuro. No obstante, este esquema no siempre se siguió de forma lineal. El futuro del discurso menemista se articulaba en un país de primer mundo, con un nivel de producción alto y un Estado de bienestar completo, regido por la economía de mercado. De hecho, fue la principal composición de su discurso de campaña.

Existió un gran giro mundial en la caída del Muro de Berlín que demostró nada menos que la derrota del marxismo como sistema socioeconómico. Dicha derrota fue tomada como una reafirmación de la política económica peronista, ya que el partido gobernante decía nunca haber tenido relación con esa colectividad económica; el radicalismo, entre los desaciertos del menemismo, esperaba fortalecerse. De todos modos, la etapa de hiperinflación y la falta de capacidad para manejar el país a fines de los años 80 se hacía sentir en la sociedad. En las elecciones legislativas de 1991, la Unión Cívica Radical quedó en segundo lugar, dejando primero al Partido Justicialista.

La figura central del plan económico menemista se tornó luego hacia Domingo Cavallo, el ministro de Economía asumido desde 1991. Mediante el Plan de Convertibilidad, iniciado en abril de 1991, Cavallo logró reducir la inflación que en 1989 había alcanzado el 4923,57% para que en los años posteriores llegara a un 0,05%. Sin embargo, el ajuste neoliberal costó, con el paso de los años, una pérdida sustancial en las tasas de empleo. La generación de una pobreza estructural se tomó lugar a partir de estas medidas económicas.

Menem, al igual que Perón, quiso influir en los medios de comunicación y veía una parte de la prensa como una principal oposición a

su proyecto político. En efecto, presentó un proyecto de ley para aumentar las penas por delitos de calumnias e injurias. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) condenó dicho proyecto y emitió el siguiente comunicado:

"Penalizar los eventuales excesos en el ejercicio de la libertad de información a la ciudadanía mediante la aplicación de sanciones que superan holgadamente a las contempladas para reprimir hechos de notoria gravedad para una convivencia social armónica constituye un mecanismo proclive para fomentar una prensa complaciente en sus críticas y una traba para el desenvolvimiento del periodismo de investigación, merced a la cual, en el curso de los últimos años, fue posible esclarecer hechos delictivos, de corrupción social y de inconducta ética de algunos funcionarios públicos y relevantes personalidades".

Si bien los medios de comunicación y su impacto en la opinión pública no habían comenzado necesariamente en la década de los 90, en ese entonces, se generó un fenómeno que podemos denominar "la mediatización de la política". Los medios audiovisuales se encargaban de construir la imagen de un candidato, y se posicionaban como un factor determinante en el marco electoral. De hecho, la comunicación política encontraba su principal soporte en los medios audiovisuales, ya que las entrevistas y el debate público definían las posiciones y características de los dirigentes y candidatos. Menem, antes de su asunción, realizaba apariciones casi diarias en la televisión nacional. Se puede concluir en que el presidente amaba la cámara y se esforzaba de manera directa en ser un "personaje de la farándula".

Los efectos de la sanción de las dos leyes mencionadas antes fueron soslayados capciosamente por la mayoría de la prensa dominante. El presidente era visto como un hombre "carismático y entrador", cuya imagen era construida principalmente por la farándula de los medios audiovisuales.

El discurso menemista se basaba en una "Argentina de primer mundo". Un país que se posicionaba más cerca de Norteamérica que de

América Latina. Una bisagra, no únicamente para el peronismo, sino para ambos partidos, fue el denominado "Pacto de Olivos" en 1993, que buscaba realizar una reforma constitucional. Dicho pacto planteaba el principal capricho del presidente Menem: su reelección indefinida. A su vez, el acuerdo sostenía la continuidad del radicalismo en la política nacional. El pacto obtuvo la sanción de ambas cámaras. De todos modos, generó tensiones y cruces dentro del propio radicalismo, causando que algunos legisladores de su color político votaran en contra y que algunos militantes de base expresaran un claro descontento con esta medida. Menem obtuvo su reelección y Alfonsín, el entonces titular de la UCR, la posibilidad de sumar doce senadores de los 22 nuevos agregados por la reforma constitucional. El titular radical aseguró "sin pacto, hubiera sido peor". Sin embargo, este acuerdo fue la cláusula de toda actividad opositora en términos políticos. La concepción de democracia otra vez era puesta en duda por un acuerdo cerrado entre dos personas, dentro de cuatro paredes.

Este acuerdo se suele tomar con cierta ligereza. No obstante, puede ser uno de los orígenes del transitorio fin del bipartidismo. De este hecho se originó el principio de la alianza Frepaso–UCR, que iba a asumir el poder en 1999. Este frente de oposición, conformado por sectores de la UCR disidentes de Alfonsín y fuerzas de centroizquierda, siguió una agenda opuesta al expresidente e hizo énfasis en el estado crítico de las instituciones y la corrupción del oficialismo. El acuerdo benefició a Menem en un mayor porcentaje. Él mismo sostenía que si las cosas le iban "más o menos bien" su reelección estaba asegurada. Alfonsín se mostraba con una postura más inhibida e insegura, argumentando que este pacto era necesario para el país. El presidente Menem se expresó sobre el mencionado acuerdo de la siguiente manera:

"Es la primera vez en la historia de la Argentina que se lleva a cabo una reforma de la Constitución en forma consensuada entre los partidos mayoritarios. Es un hecho casi único. ¿Los radicales no pedían el

consenso? Bueno, ahora tienen el consenso, porque el 75 por ciento de la población se está expresando en este acuerdo, que complementa el abrazo de Perón y Balbín".

La crisis institucional del radicalismo, a partir de este acuerdo, era de las peores en muchos años. El expresidente perdía credibilidad y popularidad en la sociedad y en sus bases partidarias. Este hecho superaba en un amplio margen el costo político de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. El radicalismo debía prepararse para una reorganización significativa y no dejar de lado sus principios. El menemismo venía de un consenso social que le había generado la convertibilidad, siempre haciendo énfasis en el malestar social ocurrido en 1989, a causa de la hiperinflación.

La nueva reforma constitucional de 1994 estuvo centrada en las decisiones del Poder Ejecutivo. Su intención era democratizar el poder a partir de la incorporación de la Jefatura de Gabinete y la creación del Consejo de la Magistratura. Sin embargo, el principal propósito era compensar los anhelos del presidente en ejercicio. El Consejo de la Magistratura no pudo solucionar las disputas políticas que se generaban en torno al Poder Judicial, y si bien fue una herramienta que podría haber sido considerada como un avance, no pudo resolver los problemas judiciales de fondo.

En las elecciones de 1995, la estrategia político electoral del menemismo se basó en sembrar miedo. Si la victoria era de Bordón (Frepaso) y no se aseguraba que Menem ganara en primera vuelta, según el oficialismo, se iba a producir una fuga de capitales y un derrumbe del sistema financiero. En consecuencia, Bordón afirmaba que esta estrategia obedecía a "una maniobra más para tratar que la gente, en lugar de votar por la esperanza, lo haga por el miedo". Entre tanto, la izquierda iba a criticar duramente a los candidatos oficialistas, radicales y de la alianza e iba a expresar su explícito rechazo hacia el pacto con el FMI.

El radicalismo atravesaba una gran crisis partidaria y llamaba a

reorganizarse. El Pacto de Olivos había sido, para los votantes y los afiliados partidarios, un verdadero punto de inflexión. Se hablaba de una crisis identitaria, luego de que el partido con mayor antigüedad de la historia argentina llegara a su peor momento. Su resultado fue consecuente, ya que el radicalismo, con la fórmula Massaccesi–Hernández, solo obtuvo el 16,99% de los votos. Menem, en un presunto acto de lucidez política, llamó a los radicales a votar por los radicales. De esta manera, estimulaba el voto de la Unión Cívica Radical y quitaba votos al Frepaso, que se mostraba como la principal oposición al menemismo. El voto radical se encontraba esparcido y el presidente no quería que eso complicara su victoria. Dicha táctica es la que aseguró el triunfo del menemismo, ya que el voto opositor fue grande, pero la polarización y la promulgación del miedo contribuyeron a su victoria.

En este período, la economía parecía estar realmente por encima del sistema político. De hecho, el Frepaso se mostraba como una alternativa progresista, pero poco afianzada para hacer frente a las complejidades que podían suscitarse en caso de que tuviera que gobernar. Bordón tampoco contaba con el respaldo político para destacarse como jefe de la oposición.

Se recordaba a la anterior y controversial reforma constitucional y se instituía la idea de una rereelección de Menem en las elecciones de 1999. El oficialismo negó este rumor, en parte promulgado por el Frepaso, y el mismo presidente sostuvo que era imposible otra reforma. No obstante, no iba a ser la última elección protagonizada por Carlos Saúl Menem. El presidente bromeaba con una candidatura de su vicepresidente, Eduardo Duhalde, quien fue finalmente el candidato en las posteriores elecciones.

Existía un consenso social por la convertibilidad, que había logrado reducir la pobreza en los primeros años de su implementación. Sin embargo, en los últimos años del mandato menemista, la pobreza había llegado a un 29,7%, había vuelto a los niveles producidos por la hi-

perinflación de 1989, y la protesta social se acrecentaba. Es prudente hacer un contraste con la presidencia de Alfonsín, ya que los niveles de pobreza en el último mandato de Menem habían alcanzado los índices producidos por la hiperinflación. La CGT, no obstante, realizó cuatro paros generales en los últimos cuatro años de menemismo, mientras que la central sindical convocó a trece paros durante el gobierno radical. Esto se debe, según diversas opiniones, al consenso que había generado la Ley de Convertibilidad. Empero, las reformas impulsadas por Alfonsín tuvieron una intención más acentuada de influir en las cúpulas sindicales y, por ende, provocaron más rechazo en este sector. Por otro lado, la historia argentina ha demostrado que el Partido Justicialista ha tenido más habilidad de generar acuerdos por fuera del aparato gubernamental, y especialmente en el caso de la CGT, que se identificó durante la mayor parte de su ejercicio político con la ideología peronista.

Un hecho clave para la posterior caída de Menem fue la alianza entre el radicalismo y el Frepaso, que ante encuestas positivas, formaron un acuerdo para poder vencer al oficialismo. Vencieron en las elecciones de 1997 y 1999 y cortaron una racha de 10 años de victorias justicialistas. Entre tanto, la inseguridad se acrecentaba y el pedido de mano dura en la sociedad se transformaba en una moneda corriente. Menem iba a intentar, de manera muy contradictoria, una nueva reforma de la Constitución que lo habilitara a un tercer mandato. En 1999, la Alianza se iba a imponer con un 48,37% de los votos frente a un 38,28% del justicialismo, que hizo su peor elección en la historia.

4. Matriz nacional–popular

Néstor Carlos Kirchner asumió la presidencia el 25 de mayo de 2003. Fue el primer presidente en recibir el país con un orden económico positivo y un PBI en expansión. Previamente, el fracaso de la conver-

tibilidad había desembocado en una de las peores crisis del país. Sin embargo, la promesa de mantener dicho plan económico había sido una bandera electoral en las elecciones de 1999. La Alianza (Frepaso–UCR) se impuso con el 48,4% frente al 38,3% de Duhalde, no obstante, el PJ mantenía el control en la mayoría de las provincias, entre ellas, Buenos Aires y Córdoba.

Previamente a la asunción de Kirchner, el país se encontraba en una de sus peores crisis. El presidente de la Alianza, Fernando de la Rúa (1999–2001) procuraba generar las condiciones necesarias para la inversión privada durante los comienzos de su presidencia. Dichas inversiones no llegaron y De la Rúa optó por bajar el gasto, recortando salarios y renegociando tarifas con las empresas privadas. En el terreno político partidario, las facciones alfonsinistas de la UCR eran mayoría dentro del partido y eran a su vez críticas con el plan de gobierno de la Alianza.

Uno de los mayores puntos de desequilibrio político dentro de la presidencia radical de De la Rúa tuvo lugar durante el tratado de la Reforma Laboral en el Senado. Se habían denunciado coimas dentro de la Cámara Alta. La corrupción ya venía siendo un tema abordado por la opinión pública y tomaba relevancia con el pedido de juzgamiento a los exfuncionarios menemistas. Este hecho bochornoso generó la renuncia del vicepresidente Chacho Álvarez. En consecuencia a la renuncia, el gobierno perdió credibilidad ante la opinión pública y los mercados se desestabilizaron. Todos los errores de gestión eran soportados a razón de la convertibilidad. En diciembre de 2001, la clase media porteña y los movimientos piqueteros se levantaron en contra del corralito (medida económica del entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo) que limitaba la extracción de dinero en efectivo a las cuentas corrientes, cajas de ahorro y plazos fijos. La debacle económica y los civiles muertos a causa de las protestas obligaron al entonces presidente radical a presentar su renuncia.

Esta exorbitante crisis puso fin a la convertibilidad. Un gobierno de transición, como fue el del peronista Eduardo Duhalde (2001–2003), generó un plan económico, con la ayuda de la suba de los precios de las exportaciones, para que el país se recuperara de una crisis tan mayúscula.

La construcción del discurso kirchnerista se basó en la polarización de la historia argentina en dos bandos antagónicos. Toda la historia se podía explicar a partir de una grieta entre un sector a favor de los intereses nacionales y otro a favor de potencias extranjeras. Esta polarización existía entre legisladores, empresarios e incluso civiles. Podríamos remitirnos al siglo XIX, a la puja entre los gobiernos conservadores y la Unión Cívica Radical, a los posteriores golpes militares y los gobiernos peronistas. Sin embargo, se suscita una contradicción cuando esta polarización se da dentro del movimiento peronista, o por otra parte, con movimientos políticos que no se corresponden con lo que fue el partido militar.

La asunción de Néstor Carlos Kirchner a la presidencia significó un consenso en la sociedad civil y la clase política, que se desconocía desde la primavera alfonsinista. El grito de "que se vayan todos" había quedado relegado. La sociedad civil mostraba un claro descontento hacia la clase política debido a la gran crisis económica de 2001 y argumentaba que, de alguna forma, toda la clase dirigente tenía responsabilidad frente a este hecho. Estas ideas, por un momento, parecieron esfumarse. El nuevo presidente mostraba un progresismo muy políticamente correcto, con la creación de un movimiento nacional y popular amplio. Sostenía la promesa de poner *el consumo interno como centro de una política de expansión* y construir un capitalismo nacional. Claro desde sus comienzos, en su discurso, reivindicó a la generación de la década del 70. Toda la clase política, a excepción del menemismo, apoyaba o legitimaba al nuevo presidente.

Kirchner destacaba que el Estado iba a ser el garante de igualdad en la sociedad. El mercado, en cambio, no servía para la causa de los

desposeídos. La economía ahora estaba bajo el dominio de la política, y no viceversa. El relato sobre la década del 70 era reivindicado y la posición en contra de la última dictadura cívico–militar iba a formar parte del eje central del discurso del nuevo presidente. En el primer mes de gobierno, el presidente electo y el ministro de Justicia iban a informar sobre una nueva reforma policial, que dejaba en manos del Poder Ejecutivo la asignación de nuevos comisarios, en lugar de dejar dicha tarea a la Policía Federal. El relato antidictadura y en contra de las Fuerzas Armadas iba a ser la principal bandera política. Hubo una contraposición al relato alfonsinista y la teoría de los dos demonios sobre la dictadura, que fueron criticados severamente. A su vez, fueron derogadas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, también sancionadas en la presidencia de Raúl Alfonsín.

El 24 de marzo de 2004 se dio uno de los actos más característicos de Néstor Kirchner. El presidente descolgó los cuadros de los dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone. Este acto suscitó adhesiones y controversias, no obstante, los sectores más progresistas se mostraron a favor. El relato sobre la década del 70 iba a ser condicionado y el kirchnerismo iba a representar en términos políticos al peronismo de la resistencia. Dentro del revisionismo histórico, se hizo énfasis en lo ocurrido a partir de 1976, cuando, si bien la represión ilegal se acrecentó, no fue dicho año en el cual comenzó el paulatino proceso hasta la llegada de los militares. Dicho esto, explicar los años 70 en la Argentina a partir de la toma del poder de los militares sería desconocer la génesis de la verdadera problemática e ignorar el terrorismo de Estado ocurrido antes del Proceso; de todas maneras, reivindicar los movimientos setentistas no era más que hacer énfasis nuevamente sobre la identidad latinoamericana. Era el claro repudio a la injerencia estadounidense en el continente. Esta vertiente del peronismo iba a plantear la contraposición al silencioso consenso del justicialismo frente al Juicio a las Juntas de los años 80.

El peronismo de la resistencia se iba a trasladar a los años 2000. El Partido Justicialista forjó alianzas con sectores de izquierda y centroizquierda, formando la coalición Frente para la Victoria en 2003. El movimiento emergente se mostró hostil hacia el llamado PJ de derecha. Paradójicamente, a excepción de Menem, el Partido Justicialista se orientó institucionalmente hacia la nueva tendencia izquierdista y se ofreció a brindar apoyo. De igual manera, Néstor Kirchner había formado parte de la boleta del justicialismo como candidato a gobernador de Santa Cruz durante los años 90, acompañando a Carlos Saúl Menem.

Podemos situar estos hechos dentro de lo que anteriormente había denominado como "trama relacional". El kirchnerismo identificaba a la izquierda peronista, e incluso sectores no peronistas, como espacios afines. En efecto, tomó parte del eje discursivo de este sector y lo incorporó, ampliando su espectro político. A su vez, percibió claramente su campo político y se definió como la antítesis de sus opuestos. Desde esta época, una nueva forma de polarización se implementó como forma discursiva. La nueva izquierda necesitaba confrontar con "la derecha".

El comienzo de dicha polarización y su posterior exacerbación se dieron, a mi entender, a partir del conflicto con el campo y la resolución 125. La presidenta era Cristina Fernández de Kirchner, esposa de Néstor, elegida en 2007 con el 46,29% de los votos. Fue en marzo de 2008, cuando el ministro de Economía, Martín Lousteau, anunciaba un nuevo sistema de retenciones móviles a la exportación agropecuaria. El conflicto se desató cuando el Ejecutivo aumentó por tercera vez las retenciones a las exportaciones de cereales y oleaginosas. El campo mostró una dura oposición a esta medida y convocó a una huelga de 48 horas, cortó rutas durante más de 100 días y logró adeptos en los sectores urbanos. Néstor Kirchner calificó estas protestas como los "piquetes de la abundancia". No obstante, Julio Cobos, vicepresidente

de la nación, tras no encontrar ningún acuerdo, propuso llevar esta problemática al Congreso. Tras media sanción en Diputados, el proyecto de ley llevaba un empate en el Senado, y el voto negativo del presidente del Senado Julio Cobos frenó dicho proyecto.

A partir de este hecho, se creó un grupo de intelectuales orgánicos llamado Carta Abierta, que argumentaban la necesidad de reforzar el discurso oficialista debido a que el conflicto de la 125 representaba alegóricamente algo más que un proyecto de ley. La primera carta publicada comenzaba explicitando esta idea:

"Como en otras circunstancias de nuestra crónica contemporánea, hoy asistimos en nuestro país a una dura confrontación entre sectores económicos, políticos e ideológicos históricamente dominantes y un gobierno democrático que intenta determinadas reformas en la distribución de la renta y estrategias de intervención en la economía".

La primera carta hacía evidente referencia al rol del Estado como interventor de la economía, a la política como herramienta emancipadora y a la necesidad de expandir el espectro político hacia el mundo de las artes y la academia. Todas las posiciones que el texto tomaba con respecto al contexto político las hacía desde una posición histórica. En resumidos términos, esta dura confrontación respondía a una antigua lucha dentro de la política nacional. No obstante, muchos matices se soslayan. Si nos situamos en los gobiernos liberal–conservadores de fines del siglo XIX, podríamos identificar dos modelos en puja como el conservadurismo contra el radicalismo. Desde la sanción de la ley Sáenz Peña, se podría afirmar con un criterio válido que el golpe de 1930, y sobre todo la Década Infame, funcionó como una contraparte a esta ley, ya que si había una ley vigente era necesario recurrir al fraude. Pero de todas maneras, en las elecciones de 1946, como se había planteado anteriormente, la Unión Democrática se enfrentó al Partido Laborista que representaba la candidatura de Perón, un militar que había participado en el golpe del 30 y cuyo discurso poseía una clara

impronta conservadora. El pensamiento dicotómico, no obstante, va a ser analizado con más énfasis en la última parte de este trabajo.

El movimiento peronista se articuló de tal manera que el kirchnerismo, si hacemos un mero análisis político, en 1946 hubiera formado parte de la Unión Democrática, ya que su discurso no tenía nada que ver con el conservadurismo peronista de la época. No obstante, por este motivo, sobre todo en sus últimos períodos, buscó silenciosamente distanciarse del peronismo clásico.

Como habíamos visto anteriormente, las principales alianzas con las dictaduras militares fueron hechas desde el justicialismo, partido mediante el cual los Kirchner asumen el poder. Por otro lado, la carta pretermite la firme posición del gobierno nacional en ese entonces, encabezando contramarchas en la Plaza de Mayo y, en algunas ocasiones, mostrando violencia y hostilidad a los opositores. La referencia al sector agropecuario como un sector homogéneamente ideológico es desacertada, ya que las diferencias entre las entidades representativas de dicho sector fueron omitidas solamente debido al aumento de retenciones.

De manera adrede o no, el texto termina con una frase que bien puede hacer alusión a un problema estructural de la política, o puede suscitar una propia contradicción ideológica: "Todo lo expresado y resumido da pie a la necesidad de creación de intercambio de ideas plural de debate que nos reúna y nos permita actuar colectivamente". Si contrastamos el principio de la carta con el final, la pregunta que cabe hacerse es: ¿se puede hablar de un espacio político plural, cuando el primer párrafo de la presentación de dicho espacio identifica un sector tangible y concreto como antagónico? Si realmente existiese un espacio plural, en el estricto sentido del término, entonces no existiría la confrontación política e ideológica. Si el orden social es contingente, y el acuerdo total es infundado e imposible, lo posible es el consenso, y el consenso es imposición. En efecto, la idea de pluralismo no resulta

posible. Pero si lo que se quiere decir por pluralismo es la intención de una apertura institucional al resto de la sociedad, entendiendo la incapacidad de un movimiento político para abarcar a cada individuo, entonces habría que desechar esta idea, ya que el sector por confrontar es claro, y se vuelve aún más claro cuando uno revisa los archivos de la época y ve la cantidad de adeptos que poseía dicho sector. La pérdida del oficialismo en el conflicto agropecuario significó un quiebre dentro de su estabilidad política. Julio Cobos, vicepresidente radical y prueba remota de la heterogeneidad del partido gobernante, votó en contra de la Resolución 125 impulsada por el gobierno.

Otro gran debate que impactó sobre la opinión pública se dio en el eje de los medios de comunicación. Se implementó la ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, tratada en el Congreso, en contraposición a la ley 22285 sancionada durante la última dictadura militar. Dicho proyecto generó controversias, sobre todo con el Grupo Clarín, que había sido un gran aliado del gobierno en los primeros años de gestión. El mismo proceso se repitió en algunos países de la región, como el caso de Venezuela, Ecuador, Uruguay y Perú. En el caso uruguayo, la ley fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte debido a los artículos 39 tercer inciso, 55, 60, 98 y parte del 143. Sin embargo, el debate siguió siendo sobre la regulación del Estado sobre el mercado. El artículo 55 de la ley uruguaya planteaba una restricción del 25% para los suscriptores de empresas de servicios de televisión, evitando de esta forma monopolios y oligopolios mediáticos. El artículo 45 de la ley argentina circulaba sobre ese mismo eje, limitaba la cantidad de contratación de licencias y hacía énfasis en lo perjudicial que eran para la sociedad las prácticas monopólicas y oligopólicas. Carta Abierta publicó su segundo comunicado en el cual rechazaba la concentración mediática y la lógica mercantil de las noticias, identificando a la problemática como algo global. Después de este conflicto, el discurso oficialista se mostró más hostil hacia los medios masivos de

comunicación y comenzó a centrar el debate en teorías sociológicas y comunicacionales. La teoría de la aguja hipodérmica[17] paradójicamente servía para los opositores, pero no para el oficialismo. Es decir que la alienación iba desde los grandes conglomerados mediáticos hacia las clases medias y altas.

La oposición al kirchnerismo, hasta ese entonces, era muy débil y carecía de representación política. Hubo un gran consenso social desde 2003 hasta 2011, donde Cristina Fernández de Kirchner fue reelecta con el 54% de los votos y dejó en segundo lugar al socialista Hermes Binner con el 17%. La oposición no pudo generar ni siquiera una segunda vuelta. La presidenta había logrado asentar bases en la juventud de la izquierda peronista, en la clase media y en los sectores más progresistas. El kirchnerismo mantuvo su mayoría parlamentaria y el poder se centraba cada vez más sobre el Poder Ejecutivo. La presidente electa había ganado en primera vuelta sin haber concedido una sola entrevista a los medios y sin haber participado de ningún debate. El discurso oficialista hacía referencia a un balance económico y social a 10 años de la gran crisis económica de 2001 y reivindicaba las luchas de las Abuelas de Plaza de Mayo durante la última dictadura. Se aspiraba a mucho más que un plan de gobierno, se buscaba una coalición polipartidaria que englobara a la mayor cantidad de corrientes políticas posibles. De todas maneras, dentro de esa misma intención expansiva, seguía vigente la polarización, que se exacerbó en el período 2011–2015.

Lo llamativo del segundo mandato cristinista fue la rapidez con la cual la oposición, con poca adhesión hasta ese entonces, logró consolidarse. Puedo atribuirle a este fenómeno la carencia de representatividad política disponible para el ejercicio del voto. La economía del país, con una mejoría durante los primeros años de gobierno (2003–2008),

17 Teoría comunicativa que sostiene que un mensaje es recibido y aceptado en su totalidad por su receptor, sin una reflexión crítica sobre este.

se basó luego en un modelo ultraproteccionista, una gran emisión de dinero y un mayúsculo aumento del gasto público. Los niveles de proteccionismo y presión impositiva superaban a los demás países de la región. Esto trajo como consecuencia la inhibición de la inversión privada, el estancamiento económico y el aumento de la inflación llegando casi a un 40% anual en 2014. Por otro lado, se daban a conocer causas de corrupción a través de los medios y la opinión pública, las cuales involucraban a altos funcionarios del gobierno. A estas acusaciones, el oficialismo respondía con la polarización y el desdén hacia los medios masivos de comunicación.

Pese a que Cristina fue reelecta con una gran base de apoyo, en 2012 y 2013, la clase media porteña organizaba cacerolazos y salía a marchar en contra de las políticas del gobierno. La inseguridad, la corrupción, el poder centrado en el Ejecutivo y las aspiraciones políticas de Cristina Fernández eran los principales reclamos de la oposición, un sector político que aún carecía de representación. Me refiero a las aspiraciones políticas, debido a que se la identificaba a la presidenta como autoritaria, por sus anhelos de ser reelecta. Las cadenas nacionales con agravios a opositores y disidentes, y la exacerbada propaganda partidaria, generaban el sentido de que el kirchnerismo buscaba perpetuarse en el poder, sin ninguna intención democrática. El oficialismo desestimaba las protestas, pese a que fueran masivas. El programa de propaganda gubernamental *678* calificaba estas protestas como *las marchas del odio* y como *los que querían comprar dólares*. Dichas manifestaciones se componían por gente autoconvocada, sin representación partidaria y mayormente de edad adulta.

Dentro de estas marchas, primaba un discurso individualista, contrario al colectivista del gobierno nacional. La característica en común de ambos era la hostilidad. El sector movilizado carecía de representación política, y tampoco existía un acuerdo ideológico claro. Dentro de la oposición, emergió un sector sin representación y con

una base electoral sólida, entre los sectores del campo, la clase media porteña y el interior del país. Estos sectores buscaban sintéticamente que el kirchnerismo no gobierne más el país. La CGT, que había sido la raíz del peronismo y representaba al movimiento desde sus inicios, mantenía una tensa relación con el gobierno nacional debido al aumento de los impuestos a los trabajadores. La central obrera llamaba a implementar *el peronismo de Perón*.

De esta manera, el kirchnerismo no pudo, mediante su praxis, consensuar con el amplio espectro peronista. De hecho, se le cuestionaba al gobierno su verdadera matriz partidaria. Concluyo, entonces, en que el kirchnerismo tampoco construyó un discurso sustancialmente peronista. Si se quisiera hacer un análisis, debería tomarse en consideración a los denominados gobiernos populares del mismo período.

Se ha planteado, en reiteradas ocasiones, una gran dificultad en comprender fenómenos como el kirchnerismo, así como al resto de los llamados *socialismos del siglo XXI*. Esta matriz política, que poseyó un fundamento en los principales hechos ocurridos en la Argentina a mediados del siglo XX, ha planteado, como se mencionó anteriormente, una visión acerca de la década del 70 e implementado un relato que legitimó las acciones políticas realizadas durante su mandato. Al unísono con los demás gobiernos emergentes latinoamericanos de la época, incorporó los movimientos sociales y de derechos humanos al aparato gubernamental. A esta fórmula de gobierno se la denominó *gobierno popular*. Para referirnos a los gobiernos sucedidos en América Latina en los años 2000, podríamos hablar de una convergencia entre las corrientes posmarxistas y neopopulistas.

Me parece oportuno tomar la famosa obra biográfica de Domingo Faustino Sarmiento llamada *Facundo* e intentar hacer una distinción ilustrativa de la problemática planteada por el autor. La obra narra la vida del caudillo riojano Facundo Quiroga y, a su vez, plasma las corrientes e ideas políticas de la época en la Argentina. A partir de este

libro, el dualismo de civilización y barbarie se puso en discusión en el país. El modelo de civilización estaba explícito en la obra sarmientina y poseía una clara referencia a la ideología unitaria, mientras que los federales eran identificados como la barbarie. Esta era una manera dicotómica de interpretar la realidad social en ese contexto de guerra civil entre unitarios y federales. Al mismo tiempo, Sarmiento se basaba en el ideal romanticista que apoyaba la idea de reducir un contexto en concreto a una sola persona. Dentro de los parámetros sarmientinos, la civilización vendría desde Europa hasta la ciudad, y la barbarie estaría diseminada en el campo, en las provincias. José Martí propone superar este dualismo que, lejos de ser sociológico o filosófico, era un mero discurso político, a partir de cambiar los nombres de dicha dicotomía.

Dentro de estas dicotomías, percibo una clara problemática, ya que dentro de la civilización hay barbarie y dentro de la barbarie hay civilización. No se podría, de ninguna manera, disociar un concepto de otro. Al mismo tiempo, Martí también cae en la misma dicotomía. Si hacemos un análisis de la obra de Sarmiento desde una matriz nacional–popular, claramente situaríamos, de manera ambigua, la civilización dentro del concepto de barbarie. Los unitarios fueron identificados como los miembros de la elite porteña y los federales como los campesinos comprometidos con la causa de los desposeídos. Algunos académicos han hablado de este dualismo como simples representaciones simbólicas. Es decir, la barbarie no significa algo ajeno a cualquier tipo de orden social, sino un orden subalterno. Empero, no podríamos percibir estos dos conceptos como ajenos uno del otro.

El kirchnerismo tomó el pensamiento dicotómico en torno a la identidad latinoamericana y lo plasmó en su discurso político. La creación de una identidad latinoamericana fue surgiendo, sobre todo en el último período de gobierno, como un eje central discursivo. El pensamiento latinoamericanista, sin embargo, no inició dentro de los *socialismos del siglo XXI*. La clave dicotómica es también un elemento

retórico. La identidad de Latinoamérica ha quedado inconclusa a lo largo de la historia.

Alcira Argumedo, en su libro *Los silencios y las voces de América Latina* desarrolla la problemática de definir una identidad latinoamericana, ya que esta es el resultado de un proceso de colonización y conquista y se componía de una manera sumamente heterogénea. Este trabajo, además de desarrollar la noción de matrices teórico conceptuales, se centra específicamente en la matriz nacional popular. Desde esta misma postura, la autora cuestiona a Kant cuando este sugiere que el pueblo de los americanos "no es susceptible de ninguna forma de civilización" (Argumedo; 19), ya que esta postura solo tendría validez si pensamos en el progreso como algo lineal y eurocentrista. En este mismo sentido, el libro desarrolla la problemática de traducción de las ideas políticas, una idea también expuesta por el doctor en sociología De Sousa Santos. Las ideas de Rousseau no podían ser, desde un punto de vista pragmático, utilizadas por los movimientos independentistas de igual manera, ya que los contextos no eran los mismos.

"El proyecto de Artigas encontrará la drástica oposición del patriciado de las ciudades con su racionalismo ilustrado y mercantil, cuyos intereses conforman el sustento del orden estamental blanco, de la enajenación oligárquica a las prebendas del mercado exterior y al reconocimiento del mundo *civilizado*" (Argumedo; 40).

Leandro N. Alem, según esta matriz, formaría también parte de la resistencia al orden unitario de la elite porteña y representaría la soberanía nacional. De esta forma, el radicalismo surgiría como primer partido nacional del país. Después de la fallida Revolución del Parque en 1890, se comenzó a contemplar en el seno de los gobiernos conservadores de fines del siglo XIX la posibilidad de un sufragio universal, ya que este estaba siendo implementado en Europa.

Es controvertido y complejo hablar de una identidad latinoamericana debido a que dicha identidad política no se pensó a sí misma,

sino que fue pensada. Los conceptos de democracia liberal, o la disposición de la jerarquía estatal, no se pensaron dentro del continente, sino que fueron importados de Europa. Podemos decir entonces que defender una postura latinoamericanista inevitablemente conduciría a una contradicción.

La obra de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, *Hegemonía y estrategia socialista*, se muestra como un pilar clave en la consolidación de los socialismos del siglo XXI. Los autores empiezan a hablar de la reinvención de una nueva izquierda con una democracia radicalizada. Lejos de caer en un dogmatismo, había que radicalizar la concepción democrática y desarrollar la protesta social como forma de manifestación. La exposición más relevante que encuentro es la sustracción de la clase obrera como clase revolucionaria. Todos los espacios podían ser espacios de lucha, a diferencia del socialismo tradicional. Ningún gobierno de izquierda, después de la caída del socialismo real, iba a sostener la necesidad de hegemonizar a partir de la clase obrera.

Laclau y Mouffe, así como Bourdieu y Franzé, han hecho una distinción entre lo político y la política. Es prudente utilizar esta distinción, ya que lo político, según los autores, corresponde a los discursos y movilizaciones por fuera del aparato estatal y la política hace referencia las instituciones que contribuyen a consolidar el orden social. Desde esta perspectiva, podemos decir que los gobiernos de Evo Morales y Lula da Silva, así como el de los Kirchner, traspasaron los movimientos que se encontraban dentro de lo político hacia la política. Sin embargo, dichos movimientos sociales y de derechos humanos se encargaban de lidiar con los problemas estructurales de la política. Por ende, al aprehender los movimientos de resistencia al establishment hacia el propio establishment, se perdió la esencia de resistencia que dichos movimientos tenían.

En concordancia con Axel Honneth, la protesta social se da en nombre del reconocimiento. Es decir que la adquisición de derechos se

da "desde abajo". Por lo tanto, el Estado no podría, desde esta óptica, promover la protesta social siendo el garante de los derechos adquiridos y por adquirir. Nunca podría camuflarse en el rol de subalterno. Todo Estado es dominante. Si un plan de gobierno se basa en promover esta creencia, entonces existe una intención vislumbrada de desplazar la noción de poder hacia otro ámbito.

¿Es posible pensar en una identidad latinoamericana? ¿Es posible promoverla desde un sector político en particular? Martí, en contraposición a Sarmiento, propone una superación de la antinomia civilización–barbarie, en tanto la entiende como un reduccionismo que, en último término, siempre acaba justificando el accionar "civilizado" en contra de lo que es construido como barbarie. Martí desarrolla otros dos conceptos, a los que nombra "naturaleza" y "falsa erudición". La naturaleza es la realidad material e histórica de todos los pueblos, que merecen ser gobernados de manera justa y legítima y deben tomar el poder en caso de que los "letrados artificiales" gobiernen de manera ajena a los intereses del "hombre natural". Se centra en un nuevo paradigma que propone pensar la constitución de una identidad sin desarrollarla de "arriba hacia abajo". Este es un paradigma contrario al modernizador.

La superación del dualismo planteado por Sarmiento implica la necesidad de quitarle la significancia negativa a la barbarie, así como dejar de plantear a civilización–barbarie como extremos opuestos. Cuando el autor se refiere a los "letrados artificiales", lo hace planteando que estos no gobiernan las naciones a favor de su verdadera naturaleza, sino que imponen un pensamiento importado y ajeno. El hombre natural es, por consiguiente, el hombre autóctono, propio de las naciones latinoamericanas. Hay una directa analogía entre la falsa erudición y el letrado artificial. El autor plantea que hay una apropiación del saber por parte de las corrientes eurocentristas o tradicionales, cuando sostiene que "a adivinar salen los jóvenes al mundo, con antiparras yanquis

o francesas, y aspiran a dirigir un pueblo que no conocen". La metáfora de las antiparras se relaciona con las revoluciones norteamericana y francesa, ya que desde esos sucesos nacen algunos pilares básicos para el pensamiento liberal moderno.

Partimos de la idea de que desde la Antigua Grecia y el Imperio romano se desarrollaron las bases para la civilización moderna occidental. No obstante, si nos remitimos a una frase en que Martí utiliza a Grecia de manera metonímica, vemos que el autor crea el concepto de *nuestra Grecia*, ya que se refiere a su propia interpretación de la Antigüedad. En este caso, la Grecia que no es nuestra es la de la falsa erudición, la del letrado artificial. La Grecia nuestra de la que habla Martí tiene que ver con la recuperación de saberes y la reconstrucción histórica de la propia Antigüedad precolombina, con el objetivo de entender y conocer la realidad del propio pueblo, la creación del saber autóctono y su valor.

La historicidad del saber europeo y el americano son diferentes, por lo cual deben ser interpretadas y entendidas desde sus orígenes y particularidades. La civilización occidental que llegó a América no fue pensada en conjunto, sino que fue impuesta. Esta frase se relaciona con la metáfora que el autor utiliza al referirse a la juventud con antiparras francesas y yanquis.

Al mismo tiempo, Martí plantea que no hay odio de razas porque no hay razas. El nuevo paradigma *humanista*, contrario al sarmientino, propone tanto que es necesario repensar la noción de progreso como desalentar la idea de una confrontación racista, partiendo de la afirmación de que no existen razas. Debe existir, en términos del autor, una unión tácita y urgente del alma continental. Es más urgente y prudente un reclamo social unánime, que busque una identidad universal.

Por otro lado, la obra de Sarmiento *Facundo* puede considerarse como uno de los pilares clave para la consolidación de una identidad nacional. Y fue el *Martín Fierro* de Hernández la contraposición a

la obra sarmientina. En ese mismo eje, Martí critica fuertemente al *Facundo* pero, de igual forma, cae en ese mismo binarismo. Por consiguiente, el binarismo dentro de la interpretación social sería una clave necesaria, cercana a ser verdadera, lógica; plantear que existe un hombre natural dentro de América Latina sería hacer una interpretación esencialista, ignorando el hecho de que toda consolidación nacional es una construcción social. Si se entiende que existen pueblos originarios, por ende, existiría esencialmente una idea de nación, lo cual es desacertado, ya que la nación es siempre construida.

Para la Generación del 37[18] Francia constituía el principal modelo de civilización. De todos modos, esta era la continuación del pensamiento independentista argentino. El pensamiento de la independencia fue un pensamiento ilustrado, como lo fue la idea de nación. Mariano Moreno, en el prólogo a la traducción de *El contrato social*, calificó a los monarcas como tiranos, y llamó a que los civiles endurecieran sus corazones con la libertad republicana. Las ideas provenientes desde Europa poseían otras raíces, otro fundamento, ya que como lo calificó Arciniegas, América Latina fue un continente de revoluciones y no de guerras. La guerra es visceral y la revolución es intelectual, emancipadora.

Alberdi planteó lo que en términos hegelianos sería una idea de nación, ya que es necesario que la comunidad tenga autoconciencia de su esencia, más allá de que dicha esencia sea construida. Y se construye a ella misma a partir de su literatura, de sus creencias, de sus pensadores. El discurso político posee una exacerbada intención de formar un único modelo de ser nacional, es la forma más ágil de comunicar una idea y esparcirla. Pero no es la idea de fondo. Lo que se

18 Movimiento intelectual argentino del siglo XIX que se oponía al colonialismo español y al régimen de Juan Manuel de Rosas. Poseían una gran influencia del romanticismo inglés y francés. Se componía por Domingo Faustino Sarmiento, Esteban Echeverría, Juan María Gutiérrez, Juan Bautista Alberdi, entre otros.

busca imponer no es el discurso en sí, sino lo que es representado, o está escondido en él.

La identidad latinoamericana no existe, ni existió. Es igual de complejo definir una identidad nacional. Si bien América Latina es una hibridación de ideas, costumbres y culturas, también lo son las naciones que la componen. La aparición de este continente para los europeos en el siglo XV significó también un gran cambio en su propio campo de ideas. Y fueron ellos los que exportaron su ideología y creencias hacia América. Este es, sin embargo, un debate arduo, largo e inconcluso. La riqueza de esta temática dificulta mucho su síntesis en un simple escrito. A la vez que existió una intención de obtener una identidad propia, existió la construcción de otro, es decir, un civilizado y un bárbaro, o un invadido y un invasor.

Bibliografía

- **Alberdi,** Juan Bautista (1847). Prefacio al fragmento preliminar al estudio del derecho. En política y sociedad, Argentina. Selección, prólogo, cronología y bibliografía de Oscar Terán, Venezuela, Biblioteca Ayacucho (2005), pp. 43–65.
- **Althusser,** Louis (1988). Ideología y aparatos ideológicos del Estado. Freud y Lacan, Nueva Visión, Buenos Aires.
- **Anderson,** Benedict (1983). Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo. Traducción de Eduardo L. Suárez, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1993, capítulos I al III, pp. 17–76.
- **Argumedo,** Alcira (1993). Los silencios y las voces de América Latina, Buenos Aires, Colihue.
- **Asencio,** Lidia (2009). Algunas aproximaciones a las representaciones de la retórica peronista respecto de la relación capital– trabajo. Continuidades y rupturas del peronismo histórico: 1943–1952. XII Jornadas interescuelas/Departamentos de Historia. Departamento de Historia, Facultad de Humanidades y Centro Regional Universitario Bariloche. Universidad Nacional del Comahue, San Carlos de Bariloche.
- **Ernest,** Renan (1882). ¿Qué es una nación? en La invención de la nación. Lecturas de la identidad de Herder a Homi Bhabha. Selección, traducción, introducción y notas de Álvaro Fernández Bravo. Buenos Aires, Manantial, 2000, pp. 53–66.

- **Felman,** Fabián (2009). Historia del movimiento obrero y el sindicalismo en la Argentina. Confederación de Educadores Argentinos.
- **Finocchiaro,** Alejandro. El camino de la democracia en Grecia. Los sofistas, inédito.
- **Franzé,** Javier. La política: administración o creación. Universidad Complutense de Madrid.
- **Freud,** Sigmund. Psicología de las masas y análisis del yo. Obras completas, tomo III.
- **Freud,** Sigmund. Tótem y tabú. Obras completas, tomo III.
- **Hegel,** Georg Wilhem Friedrich (1832). Introducción a la historia de la filosofía. Editorial Globus.
- **Horkheimer,** Max (1949). Crítica de la razón instrumental, Caronte Filosofía.
- **Horkheimer y Adorno.** Dialéctica de la ilustración. Akal/Básica de bolsillo.
- **Hobsbawm,** Eric (1983). "Introducción a la invención de la tradición" en Hobsbawm, Eric y Ranger, Terence (eds.). La invención de la tradición. Traducción castellana de Omar Rodríguez. Barcelona, Crítica, 2002, pp. 7–21.
- **James,** Daniel y Wolfson, Leandro. 17 y 18 de octubre de 1945. El peronismo, la protesta de masas y la clase obrera argentina. Desarrollo Económico, vol. 27, nro. 107 (oct.–dic., 1987).
- **Laclau,** Ernesto y Mouffe, Chantal (1987). Hegemonía y estrategia socialista. Madrid, Siglo XXI.
- **Larraquy,** Marcelo (2017). Argentina, un siglo de violencia política. 1890–1990 de Roca a Menem, la historia del país. Buenos Aires, Sudamericana.
- **Maquiavelo,** N. (1998 edición). El príncipe, Madrid, Espasa Calpe.
- **Martí,** José (1891). Nuestra América. En el Partido Liberal, México, 30 de enero. A partir de la edición de Nuestra América, Venezuela, Biblioteca Ayacucho, 2005, pp. 31–39.

- **Martín,** Facundo Nahuel. Honneth y Postone. Dos teorías críticas de la modernidad.
- **Mateo–Seco,** Lucas F. El concepto de verdad en Santo Tomás de Aquino y en la teología de la liberación.
- **Nietzsche,** Frederic. Obras completas XIV, Retórica (Exposición de la antigua retórica, lecciones pronunciadas en el curso del verano de 1874, tres horas a la semana).
- **Novaro,** Marcos (2010). Historia de la Argentina (1955–2010), Buenos Aires, Siglo XXI Editores.
- **Rinesi,** Eduardo (2003). Política y tragedia. Ensayos de Punta Colihue.
- **Romero,** José Luis (2008). Las ideas políticas en Argentina, 2da ed. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.
- **Sarmiento,** Domingo Faustino (edición 2011). Facundo. Buenos Aires, Eudeba.
- **Saussure (1945).** Curso de lingüística general (Cours de linguistique generale). Buenos Aires, Losada.
- **Trías,** Vian. Tres rostros del populismo. Nueva Sociedad, nro. 34, enero–febrero 1978, pp. 28–39.
- **Van Dijk,** Teun A. (2002). El análisis crítico del discurso. Barcelona, Universitat Pompeu Fabra.
- **Verón,** Eliseo (1987). La palabra adversativa.

Índice

Prólogo.....9

La cultura y las falencias del discurso.....13

1. El discurso radical y peronista en la construcción del ser nacional.....30

La historia argentina contemporánea: el arte retórico del discurso.....53

1. El discurso subversivo.....53

2. La vuelta a la democracia.....65

3. Menemismo y peronismo.....82

4. Matriz nacional–popular.....94

Bibliografía.....113

Libro editado por

Editorial Autores de Argentina